

20/6/21

Señor

JUEZ 12 CIVIL DEL CIRCUITO DE BUCARAMANGA

E. S. D.

Ref: DEMANDA VERBAL DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL.

De: RAFAEL LATORRE BAYONA y Otros

CONTRA: JAIRO ALFONSO JIMENEZ CHITIVA y OTROS

Rad: 68001-31-03-012-2018-00392-00

EXCEPCION PREVIA

EFRAIN A. GARCIA M., mayor de edad, domiciliado y residente en la ciudad de Bogotá, identificado con cédula de ciudadanía número 79.568.765 de Bogotá y tarjeta profesional de abogado número 92.841 del Consejo Superior de la Judicatura, en mi calidad de Apoderado especial de TRANSPORTES SARVI LTDA. de acuerdo a poder que se adjunta a esta contestación, por medio del presente escrito muy respetuosamente me permito dentro del término legal de la contestación de la demanda y en documento aparte presentar Excepción Previa en los siguientes términos:

PELITO PENDIENTE

Se presenta la excepción de Pleito Pendiente establecido en el artículo 100 numeral 8 del CGP frente a la Demandante **MARYI DANIELA RESTREPO LATORRE** identificada con cédula de ciudadanía número 1.098.822.277 teniendo en cuenta que frente a esta última se está adelantando proceso de reparación directa en contra de los mismos demandados bajo el proceso No. 2014-00102-00 ante el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de San Gil y sobre el mismo asunto.

Vale la pena mencionar que ya hay fallo de primera instancia en contra de Transportes JOALCO donde se ordena a esta última a pagar perjuicios morales y Materiales a favor de **MARYI DANIELA RESTREPO LATORRE** de acuerdo a sentencia de fecha 17 de Febrero de 2020. El cual se adjunta. El fallo se encuentra en recurso de alzada.

Teniendo en cuenta que con la presente demanda se están persiguiendo tanto perjuicios materiales como inmateriales los cuales ya se solicitaron en la demanda adelantada ante el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de San Gil y frente a los mismos demandados, por parte de la Demandante **MARYI DANIELA**

RESTREPO LATORRE, solicito de acepte la Excepción previa de Pleito pendiente frente a la demandante MARYI DANIELA RESTREPO LATORRE.

PRUEBAS

Documental

- Sentencia de Primera instancia de fecha 17 de Febrero de 2020 dentro del proceso No. 2014-00102-00 proferida por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de San Gil. Donde se fallo condenando a la Transportadora JOALCO por los perjuicios Morales y Materiales ocasionados a MARYI DANIELA RESTREPO LATORRE y LAURA SOFIA RESTREPO LATORRE por la muerte de CAROLINA LATORRE ALAVAREZ.

Oficios

Solicito se Oficie al Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de San Gil con el fin que se certifique que frente a dicho Juzgado se está adelantando proceso de reparación directa en contra de los mismos demandados, por parte de la Demandante MARYI DANIELA RESTREPO LATORRE bajo el proceso No. 2014-00102-00 y sobre el mismo asunto.

NOTIFICACIONES

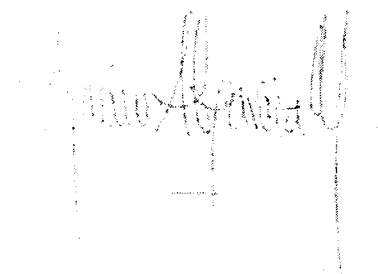
Mi mandante puede ser notificado en la siguiente dirección

asarmiento@sarvi.com.co

Puedo ser notificado a la siguiente dirección.

garciaefrain@hotmail.com

Del Señor Juez,



EFRAIN ALBERTO GARCIA MATIZ
C.C. 79.568.765
T.P. 92.841 CSJ

JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE SAN GIL

San Gil, diecisiete (17) de febrero de dos mil veinte (2020)

Medio de control:	Reparación Directa
Demandante:	Henry Restrepo Cuellar con CC 91 299 421 en nombre propio y de sus hijas Maryi Daniela y Laura Sofia Restrepo Cuellar, Lucrecia Cuellar Fierro con CC No 36 160 439, Carlos Alfredo Losada Cuellar con C.C. No 1 075 290 654 y Claudia Jimena Restrepo Cuellar con CC 55 175 699
Demandado:	Ecopetrol S.A., Transportes Joalco S.A., Transportes Sarvi Ltda, Marleny Contreras Cortes con CC 51 658 088 y Julio Ernesto Rincon Martinez con CC 17 142 959
Llamada en garantía:	Liberty Seguros S.A.
Radicado:	686793333003-2014-06102-00
Providencia:	SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Se decide la demanda de la referencia que, en ejercicio del medio de control de reparación directa, fue instaurada por los señores Henry Restrepo Cuellar en nombre propio y de sus hijas Maryi Daniela y Laura Sofia Restrepo Cuellar, Lucrecia Cuellar Fierro, Carlos Alfredo Losada Cuellar y Claudia Jimena Restrepo Cuellar contra Ecopetrol S.A., Transportes Joalco S.A., Transportes Sarvi Ltda, Marleny Contreras Cortes y Julio Ernesto Rincon Martinez, y como llamada en garantía la aseguradora Liberty Seguros S.A.

I - LA DEMANDA

A - Hechos

(fs. 10 a 15)

Narro los siguientes:

Que el día 30 de mayo de 2012 siendo aproximadamente las 4:30 a 5:00 PM, la señora CAROLINA LATORRE ALVAREZ transitaba en la motocicleta de placas RBA 17B de su propiedad por la avenida Ragonessi más exactamente en el kilómetro 0+800 mts de la vía que del Municipio de San Gil conduce hacia Bucaramanga.

A su vez, sobre esta misma vía se desplazaba a exceso de velocidad el vehículo tracto camión de placas SUB-011, marca Chevrolet, línea superbbrigadier 229, de servicio público, modelo 1987, al servicio de Ecopetrol S.A. y a cargo de las empresas contratistas denominadas TRANSPORTES JOALCO S.A. y TRANSPORTES SARVI LTDA, al cual por incumplir los límites de velocidad dispuestos en este tramo de la vía y debido a la negligencia de seguridad y prevención, se le desprendieron los tubos de propiedad de la empresa Ecopetrol que llevaba en su remolque de carga, cayendo y chocando el velocípedo y la humanidad de la señora CAROLINA LATORRE ALVAREZ, produciendo su volcamiento y muerte instantánea, así como heridas a otras dos personas.

Este trágico accidente ha causado padecimientos de toda índole a cada uno de los demandantes, en el caso del señor HENRY RESTREPO CUELLAR, se sabe que él y la señora CAROLINA LATORRE ALVAREZ fueron compañeros permanentes, desde el año 1999 y por espacio de 5 años aproximadamente, y quienes pese a ya no convivir, mantenía una excelente relación de afecto incondicional, responsabilidad, apoyo mutuo y

Encontraron puesto que juntos estaban comprometidos con brindar amor, cariño y apoyo a sus hijas LAURA SOFIA y MARYI DANIELA LATORRE ALVAREZ, de modo que con este trágico hecho el señor HENRY ha tenido que soportar la aflicción de saber que sus hijas no tendrán más la figura materna y que dicho papel debe ser representado por él en medio de las dificultades de la distancia, por cuanto sus hijas conviven con su progenitora en el Departamento de Santander, situación que le ha causado perjuicios de índole moral y de daño a la vida de relación pues de manera abrupta se convirtió en padre cabeza de familia susceptible de protección especial.

En el caso de la señora LUCRECIA CUELLAR, el señor CARLOS ALFREDO y la señora CLAUDIA RESTREPO CUELLAR, sufrieron perjuicios morales, pues en su papel de ex suegra y ex cuñados respectivamente, de la señora CAROLINA LATORRE ALVAREZ, le profesaban cariño, e incluso la señora LUCRECIA le enviaba dinero y detalles con el ánimo de colaborar con la manutención de sus nietas, adicional a lo que el señor HENRY RESTREPO les enviaba. De esta manera, la consideraban como una gran amiga con quien compartieron muchos momentos de regocijo y alegría en el tiempo que convivió con el señor Henry en la ciudad de Neiva, de modo que continuaban en contacto.

La muerte de la señora CAROLINA LATORRE ALVAREZ se encuentra acreditada con el registro civil de defunción anexo que establece como fecha de su deceso el 30 de mayo de 2012 cuando contaba con 33 años de edad y se encontraba en plena edad productiva pues laboraba y devengaba la suma de \$1.500.000.

Las serias omisiones de ECOPETROL S.A. y sus empresas contratistas TRANSPORTES JOALCÓ S.A. y TRANSPORTES SARVI LTDA. concretadas en la ausencia de control, vigilancia, mantenimiento debido y garantías de seguridad en el transporte de carga y conducción de vehículos pesados a velocidad reglamentaria, en contravía del régimen de tránsito y transporte, fueron la causa eficiente que ocasionó la muerte de CAROLINA LATOÑE ALVAREZ, lo que se concreta en una responsabilidad extracontractual de las demandadas, puesto que en desarrollo de una operación de transporte de bienes y/o equipos, tubería de Ecopetrol por sus representantes o contratistas, en el vehículo descrito en el hecho número 1, produjo una falla del servicio, daño especial y/o riesgo excepcional que concluyó en la causación de perjuicios de toda índole a los aquí demandantes.

La responsabilidad de la empresa Ecopetrol S.A. surge del hecho de sus contratistas TRANSPORTES JOALCO S.A. y TRANSPORTES SARVI LTDA durante la ejecución del contrato de transporte soportado con el manifiesto de carga No. (Codigo de Empresa) 0453 – (Codigo consecutivo) 08942916 y (Código Interno) 05017358 con fecha de expedición 2012/05/12, y de la remesa No. 050021848 de la empresa de transportes JOALCO S.A., el cual tenía por objeto el transporte de 5 tubos de acero de 20 pulgadas por 12 metros de largo de propiedad de Ecopetrol S.A., que alcanzaban un peso aproximado de 27 000 Kg. desde la ciudad de Barranquilla hasta Tocancipá – Cundinamarca, función que es propia de la Empresa y sobre la cual debe responder, así como las empresas contratistas de manera solidaria.

Como constancia de lo ocurrido se encuentra el informe policial del accidente de tránsito ocurrido en el lugar de los hechos el 30 de mayo de 2012 en el Km 0+500 mts vía San Gil - Bucaramanga, en el que se dejó plenamente evidenciado el aparatoso accidente, generado por el exceso de velocidad y las precarias medidas de seguridad en el transporte de carga pesada aquí referido.

B - Pretensiones
(fol 3-10)

- Solicitó que se declare a las demandadas administrativa y patrimonialmente responsables a las demandas, por los perjuicios de todo orden causados a los demandantes como consecuencia de la operación de transporte de bienes, equipos y tubería al servicio de Ecopetrol en el vehículo de tracción camión de placas SUB-011 de uso de público, actividad peligrosa que constituyó una falta del servicio vía riesgo.

Como en consecuencia se condene a las demandadas a pagar a título de indemnización por perjuicios morales la cantidad de 100 salarios mínimos mensuales legales a cada una de las demandantes, así como la cantidad de 100 salarios mínimos mensuales legales por concepto de indemnización por perjuicios a la vida de relación al señor HENRY RESTREPO CUELLAR y a las menores MARYI DANIELA y LAURA SOFIA RESTREPO LATORRE. Igualmente se reconozcan y paguen los perjuicios materiales por concepto de daño emergente se reconozca a favor del señor HENRY RESTREPO CUELLAR la suma de SIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS PESOS (\$7.590.500), y por concepto de lucro cesante a favor de las menores MARYI DANIELA y LAURA SOFIA RESTREPO LATORRE la suma de SETENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS DIOCHO PESOS (\$78.403.318).

II.- TRAMITE PROCESAL

La demanda, fue admitida el día 20 de octubre de 2014 por el Juzgado Administrativo 751 de Descongestión de San Gil (Fol. 296). se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en virtud del cual se surtieron las etapas de notificación en forma personal a las entidades y particulares demandados (folios 297, 299, 304-307, 312, 316-318, 327-335, 557, 600 y 659-660). Se llevo a cabo audiencia inicial el día 19 de noviembre de 2017, en la cual se postergó el estudio de la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por los apoderados de la empresa ECOPETROL S.A. y TRANSPORTES JOALCO S.A., al momento de desatar la litis (folios 931 a 939). Se celebró audiencia de pruebas el día 05 de marzo de 2019 (folios 2083-2088), el 23 de abril de 2019 (folios 2133 a 2134), el 27 de mayo de 2019 (folios 2142). Luego mediante providencia del 04 de junio de 2019 se cerró el periodo probatorio y se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión por el término de diez (10) días y al Ministerio Público para que rindiera concepto de fondo (fol. 2147).

A.- Contestación de la demanda

1. TRANSPORTES SARVI LTDA (Fol. 363 a 377 C-2). Por intermedio de su apoderado judicial, manifestó lo siguiente:

Que se opone a que se despachen favorablemente las pretensiones de la demanda, puesto que no le cabe responsabilidad alguna a la sociedad Transportes SARVI LTDA. Indica que no es cierto que sea contratista de la empresa ECOPETROL S.A., por lo que no se genera ningún tipo de responsabilidad en los hechos que se suscitan. De esta manera, la ausencia de control, vigilancia y debidas garantías de seguridad del transporte que se realizaba, le corresponden única y exclusivamente a la sociedad JOALCO, puesto que era la que tenía un contrato de transporte con ECOPETROL S.A. y fue la sociedad que contrató el vehículo de placas SUB-011 para realizar el transporte de la tubería de propiedad de ECOPETROL, la cual fue causante del accidente. A su vez afirma que le asiste responsabilidad al propietario del vehículo SUB-011 y a su conductor, el cual no es empleado de TRANSPORTES SARVI.

Excepciones de mérito a las pretensiones de la demanda principal

No responsabilidad de TRANSPORTES SARVI por no ser la empresa afiliadora del vehículo de placas SOB-991 (SIC) al momento del accidente, por cuanto TRANSPORTES SARVI no es la empresa afiliadora ya que TRANSPORTES JOALCO, por ser la empresa despachadora del vehículo SUB-011, era su afiliadora temporal, al estarse beneficiando económicamente con ese despacho, por lo que además tenía a su cargo la vigilancia y control durante la operación de transporte que realizaba ECOPETROL S.A.

Esta última afirmación la respalda indicando, que el vehículo mencionado, al momento del accidente estaba afiliado transitoriamente a la Empresa Transportes JOALCO S.A., por ser ésta la última empresa que lo despachó y expidió los documentos de transporte tales como El manifiesto terrestre de carga No. 425-0453-08942916, tal como dispone el parágrafo del

Decreto 173 de 2001 y el concepto No MT 1300-2 035830 de 2002, del
Ministerio de Transporte

La responsabilidad de TRANSPORTES SARVI por la actuación de conductor del vehículo
de placas SUB-011 ya que éste último no es de propiedad no era de propiedad de
TRANSPORTES SARVI LTDA para la época de los hechos, ni actualmente, ni detentaba
la dirección tanto del conductor o del vehículo, de esta manera, la empresa no
puede responder por los actos de un tercero, del cual no tiene ni la dirección, ni el control
ni la medida que Transportes SARVI no es la propietaria del vehículo, ni lo había
despachado. Así las cosas, se puede observar en la tarjeta de propiedad del automotor,
que pertenece a la empresa, así como también que no ha sido contratado desde el año
2000, de acuerdo con la certificación expedida por el revisor fiscal de la empresa aportada.

TRANSPORTES SARVI LTDA no era la empresa por la cual estaba despachado o fleteado
el vehículo de placas SUB-011 para la época o el día del accidente objeto de la demanda,
es así que la responsabilidad por los actos ocasionados por un vehículo de carga las asume
junto con el propietario, el tenedor, el conductor, la empresa por la cual se haya despachado
el vehículo al momento del accidente. Así las cosas, la empresa que contrató al vehículo
para realizar el despacho que se realizaba al momento del accidente que en este caso es
la Sociedad JOALCO S.A. es la que debe responder junto con el propietario, tenedor y
conductor por los actos ocasionados en ejercicio de su labor o actividad con el vehículo.
Reitera que es indispensable para que exista algún tipo de responsabilidad por parte de la
empresa transportadora, que ésta última haya despachado el vehículo expediendo el
manifiesto de carga, documento obligatorio por parte de la empresa de carga que despache
el vehículo, de lo contrario no hay ningún tipo de responsabilidad.

No responsabilidad de TRANSPORTES SARVI por la actuación de conductor del vehículo
de placas SUB-011 ya que la mera afiliación de un vehículo a una empresa de transporte
no genera responsabilidad, exclusividad y dependencia a la última, de esta manera, aclara
que si eventualmente aparece un carné de afiliación del vehículo SUB-011 a la empresa
SARVI, se debe a que la afiliación o vinculación de un vehículo a una empresa de transporte
de carga es un formalismo que en algunos casos se exige por empresas a las que
eventualmente pueden prestarle sus servicios, lo cual no constituye ni es prueba de que el
vehículo sólo preste sus servicios a la empresa afiliadora o vinculadora, pudiéndose generar
exclusividad y dependencia entre las dos partes. Así las cosas, la vinculación es un contrato
atípico, mientras que el contrato de transporte sí posee una estructura y desarrollo
normativo propio, determina sujetos, derechos, obligaciones y el régimen de
responsabilidad legal exclusivamente a la empresa que despacha y expide los documentos
de transporte, así como al transportador autorizado mediante el manifiesto de carga descrito
en el artículo 7° del Decreto 1499 de 2009.

No hay prueba de la relación de dependencia ni subordinación, por cuanto la simple
existencia de un carné de afiliación no es suficiente para hacer responsable a la empresa
transportadora SARVI LTDA, siendo que la empresa que se estaba lucrando por ser la que
realizó el despacho del vehículo es TRANSPORTES JOALCO. En este caso no se
encuentran probados los supuestos que dicta el Código Civil para que se presante la
responsabilidad civil extracontractual por el hecho de un tercero, según los cuales, están
obligadas a responder por los hechos dañosos, delictuosos o no, que cometan, las personas
naturales o jurídicas que contractualmente han aceptado responder por las obligaciones
patrimoniales que correspondan a otras, lo que no se ha verificado en este caso, pues no
se ha probado por ningún medio que exista algún tipo de subordinación o dependencia
entre el conductor o propietario del vehículo de placas SUB-011 y la empresa SARVI LTDA.

2. TRANSPORTES JOALCO LTDA (Fol. 398 a 412 C-2) por intermedio de su apoderada
judicial manifestó lo siguiente:

Que se opone a todas y cada una de las pretensiones solicitadas en contra de
TRANSPORTES JOALCO S.A. pues a dicha entidad no le asiste responsabilidad alguna.

por los hechos que sirvieron de base a la presente causa. Indica frente a la mayoría de los hechos, que contienen afirmaciones y apreciaciones subjetivas que no le constan, y que se está a lo que resulte probado en el curso procesal.

Excepciones de mérito a las pretensiones de la demanda principal

Falta de legitimación para la acción invocada por activa y pasiva, consistentes en que no se encuentra determinados los requisitos para solicitar el pago de perjuicios por la parte demandante pues si bien afirma tener grado de parentesco y afinidad con la occisa, no se acompaña prueba idónea para su acreditación.

En cuanto a la representación de los menores de edad, los registros civiles aportados cotejados con las pruebas allegadas, así como los que se solicita decretar y practicar, carecen de suficiencia para dar por sentada la calidad que dice tener la parte actora.

En el caso de la parte demandada, se debe citar a quien desplegó el comportamiento que dio origen al hecho dañoso con el que resultara lesionada la parte actora, que para el caso puntual no pueden ser distintos al conductor del vehículo de placas SUB-017, el propietario del vehículo y la empresa afiliadora del mismo, quienes en la medida de llegarse su responsabilidad, tienen el deber de soportar los efectos de cualquier decisión judicial que se adopte respecto de los hechos en que se fundamenta esta acción judicial.

Inexistencia de los elementos que dan lugar a responsabilidad civil, es decir, la culpa, el daño y el nexo causal, en el entendido que la empresa no tuvo participación activa frente a los hechos que se demandan. Además de que en las pruebas aportadas no aparece indicio alguno demostrativo de la existencia de estos presupuestos debido a que no existe vínculo contractual alguno con el conductor JAIRO ALFONSO JIMENEZ CHITIVA, de modo que no puede endilgarse responsabilidad alguna al no ostentar la calidad de empleador, guardián, propietario, poseedor, tenedor, ni afiliador del vehículo por el comandado, por lo que nos encontramos frente fenómeno jurídico de eximente de responsabilidad denominado hecho de un tercero. Así las cosas, en el caso de predicarse la subordnación, debe darse aplicación a lo establecido en el artículo 2349 del Código Civil acerca de la fuente de las obligaciones.

Inexistencia de la obligación a indemnizar, en el entendido que TRANSPORTES JOALCO no es, ni ha sido propietario, poseedor, ni tenedor del vehículo en mención, circunstancia que hace improcedente considerar que frente a los hechos que motivan la presente acción exista responsabilidad u obligación a su cargo para el pago de la indemnización que se pretende.

Inexistencia de los perjuicios pretendidos por la parte demandante, teniendo en cuenta que el daño para que sea indemnizable debe ser cierto y directo, y corresponde al demandante probarlo, razón por la cual, ante la falta de acreditación e incertidumbre, no habra lugar a la condena solicitada por la parte actora.

Inexistencia de prueba que indique la calidad de compañero permanente y parentesco por afinidad de la fallecida CAROLINA LATORRE ALVAREZ con el señor HENRY RESTREPO CUELLAR, la cual debe ser acreditada mediante sentencia ejecutoriada según lo dispone la Ley 979 de 2005, situación que se omitió en este caso.

En este orden, no habiéndose acreditado el parentesco, la filiación y aun menos la calidad con la que la parte actora requiere para si algún tipo de indemnización, no se puede endilgar que los demás demandantes tienen la calidad de parientes por afinidad de la señora CAROLINA LATORRE ALVAREZ (q.e.p.d.).

Cobro de lo no debido, inexistencia y excesiva tasación de los perjuicios, pues la parte actora parte de declaraciones subjetivas bajo las cuales se solicita reparación de perjuicios, sin que tales afirmaciones estén acompañadas con la prueba legal e idónea que acredite su existencia. Así, se apoya en el criterio jurisprudencial según el cual, los perjuicios materiales deben ser liquidados en la forma probada. Frente a los rubros inmateriales que se pretenden, las sumas exceden en gran proporción lo concedido en casos semejantes y en diferentes pronunciamientos emitidos por la máxima autoridad, los cuales, pese al arbitrio que tiene el juez para su tasación, debe considerar.

EXPEDIENTE 21.451.117
PREPARACIÓN DIRECTA
REPRESENTANTE: HENRY RESTREPO CUELLAR Y OTROS
DEMANDADO: ECOPETROL S.A. Y OTROS
ABOGADO: LIBERTY SEGUROS S.A.

Precisa que encontrándose la señora CAROLINA LATORRE ALVAREZ afiliada al sistema pensional de riesgos profesionales a través de la ARL SURA S.A. desde el pasado 24 de enero de 2011, afiliada al régimen de prima media en el sistema general de pensiones obligatorias con Colpensiones, de cuyo se hace que de haberse acreditado la calidad de hijas de la fallecida y su tutoría legal en cabeza del señor RESTREPO, las menores estén recibiendo las mesadas pensionales a las que tendrían derecho ante este evento. De esta manera transcribe un aparte jurisprudencial acerca de la concesión del lucro cesante

General o genérica consagrada en el art. 306 del C.P.C., por lo que solicita que declare probada cualquier excepción que aparezca demostrada en el proceso y que no haya sido alegada por ese extremo pasivo de la Litis

3. ECOPETROL S.A. (Fol. 451 a 457 C-2). Por intermedio de su apoderada judicial, manifestó frente a los hechos en lo que se le endilga responsabilidad lo siguiente:

Que no es cierto que ECOPETROL S.A. haya incurrido en omisiones que constituyan la causa eficiente de la muerte de la señora CAROLINA LATORRE ALVAREZ, esto porque ni el vehículo de transporte ha sido de propiedad o control de la empresa, ni el vehículo automotor ha estado afiliado a la estatal petrolera, ni mucho menos sus agentes eran los conductores del mismo. Todo para señalar que la empresa no tenía el control de la actividad profesional de transporte durante la cual se causó la muerte por la que se demanda

Afirma que es cierto que entre ECOPETROL S.A. y TRANSPORTES JOALCO S.A., se celebró el contrato MA-0009532 que responde a la categoría de un típico transporte comercial de mercaderías, tuberías para este caso, en el cual la empresa era el remitente y destinatario. En dicho contrato quedó constancia en el numeral 2° de la cláusula décima sexta "DAÑO A PERSONAS, EQUIPOS, DATOS, PROGRAMAS" que el transportador era el único responsable en la reparación de los daños que se causarían a los bienes y personas particulares.

También afirma que no es cierto que la empresa haya incurrido en falla en la prestación del servicio, pues el servicio público de transporte de mercaderías no es prestado por ECOPETROL S.A., y tampoco tiene la función de vigilancia y control, pues además, dicha actividad de transporte fue ejecutada por cuenta y riesgo del transportador, como en todo típico contrato de transporte de mercadería, y especialmente, en el clausulado especial del contrato suscrito entre remitente y transportador en el que se dejó constancia en la cláusula décima quinta "EQUIPOS Y HERRAMIENTAS", que TRANSPORTES JOALCO S.A. era quien suministraría los bienes necesarios para el transporte, además de hacerse cargo del transporte, manejo y vigilancia de los mismos y, para mayor claridad, asumió todos los riesgos que implicaba el transporte.

Así las cosas, se opone a todas y cada una de las pretensiones en su contra, pues a ECOPETROL S.A. en su condición de simple remitente de una mercadería y por este solo hecho, no se le puede hacer responsable patrimonialmente por los daños causados por el transportador, sin siquiera demostrar que la causa de los perjuicios sea imputable a la estatal petrolera.

Excepciones de mérito a las pretensiones de la demanda principal

Falta de legitimación pasiva, pues reitera que por el solo hecho de ser la remitente de una mercadería, no es la legitimada para soportar las pretensiones indemnizatorias frente a los daños causados por el transportador, principalmente porque es éste quien por su cuenta y riesgo presta el servicio público de transporte. Además, contractualmente fue el transportador el que expresamente reconoció ser el responsable de los daños causados a los bienes y personas particulares durante el transporte de mercaderías.

Carencia de imputación, por cuanto no existe ningún título de imputación que permita trasladarle al remitente de una mercadería los riesgos del servicio público de transporte, a

menos que se demuestre una culpa que sea de su cargo en el embalaje y rotulación que la naturaleza de la mercadería a transportar requiera, lo que no es predicable en el presente asunto, principalmente porque el accidente que causó la muerte de la particular no se debió al embalaje propiamente dicho, sino a un aparente exceso de velocidad del conductor del vehículo, persona y bien sobre los que ECOPEPETROL S.A. no tiene ningún control. Transcribe el inciso 2° del artículo 1013 del C.C.

Riesgo cubierto, no obstante, los daños causados en la prestación del servicio público de transporte de mercadería, es de responsabilidad del transportador y no del remitente, en el presente caso LIBERTY SEGUROS S.A. acepta asumir en todo la responsabilidad civil derivada del cumplimiento del contrato de transporte suscrito entre TRANSPORTES JOALCO S.A. y ECOPEPETROL S.A. todo lo cual da cuenta la póliza No. 408349.

4. LLAMADA EN GARANTIA – LIBERTY SEGUROS S.A. (Fol. 515 a 529 C-3). Por intermedio de su apoderada judicial, manifestó lo siguiente:

Frente a las pretensiones de la demanda principal manifiesta que se opone a todas y cada una de ellas y además a que contra su representada se efectúe cualquier clase de declaración y/o condena que afecte directa o indirectamente sus intereses, por considerar que aquellas carecen de fundamento jurídico, fáctico, probatorio, lo que impide su prosperidad, como quedará demostrado en el curso del proceso.

En cuanto a los hechos de la demanda, manifiesta que no le consta ninguno de ellos, toda vez que le resultan completamente extraños a la relación contractual emanada del contrato de seguro que se plasmó en la póliza de responsabilidad civil extracontractual derivada del cumplimiento No. LB 408349, contratada por TRANSPORTES JOALCO S.A., por lo tanto, ni se aceptan ni se niegan y se está a lo que resulte probado dentro del proceso, advirtiendo que los demandantes deberán probarlos en virtud del principio *onus probando incumbit actori*.

Excepciones de mérito a las pretensiones de la demanda principal

Excepción común, además de coadyuvar las excepciones presentadas por la demandada TRANSPORTES JOALCO S.A., para que sean consideradas en la sentencia enuncia las de falta de derecho del demandante, inexistencia de responsabilidad por parte de la demandada, inexistencia de la obligación a indemnizar, alegación inadecuada de la fuente de responsabilidad, y toda aquella que constituya causal eximente de responsabilidad de la llamada en garantía.

Frente a las pretensiones del llamamiento en garantía manifiesta que no se opone al mismo, advirtiendo que a la aseguradora no se le puede condenar por objeto ni valores distintos a los contemplados en la póliza de responsabilidad civil extracontractual derivada de cumplimiento No. LB 408349, teniendo siempre en cuenta que esa condena no lo es en forma directa a favor de los demandante, sino mediante reembolso al demandado – que sea al mismo tiempo asegurado –, cuando éste acredite haber pagado la condena de que fuere objeto.

En lo que respecta a la vinculación al proceso de LIBERTY SEGUROS S.A. en calidad de llamada en garantía con fundamento en la existencia de la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. LB 332564, cuyo tomador y asegurado es TRANSPORTES JOALCO S.A., manifiesta que se opone a que en su contra se efectúe condena alguna, ya que dicho contrato de seguro no es susceptible de afectación en este caso, debido a que éste fue suscrito entre las partes para que operara en exceso de la cobertura de responsabilidad civil extracontractual contratada dentro de las pólizas de autos AW7449 y TP272, las cuales amparan únicamente eventos en donde haya participado un vehículo de propiedad del asegurado, circunstancia que no está presente en el caso *in examen* debido a que el vehículo de placas SUB-011 por medio del que se causó el accidente de tránsito es de propiedad de la señora MARLENY CONTRERAS CORTÉS, y no de TRANSPORTES JOALCO S.A.

Excepciones de merito a las pretensiones del llamamiento en garantía

Ausencia de responsabilidad del asegurador en relación al amparo contratado bajo la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. LB 332554 en atención a que éste contrato de seguro solo opera en exceso de la cobertura de responsabilidad civil extracontractual contratada dentro de las pólizas de autos AMV/449 y TP272 las cuales amparan únicamente eventos en donde haya participado un vehículo de propiedad del asegurado, circunstancia que no está presente en el caso *in examine* debido a que el vehículo de placas SUB-011 por medio del que se causó el accidente de tránsito es de propiedad de la señora MARLENY CONTRERAS CORTÉS, y no de TRANSPORTES JOAQUINO S.A.

Limitación de la responsabilidad del asegurador con base en el contrato de seguro. Por cuanto el ejercicio de la delimitación negativa del riesgo, en la cláusula primera, numeral segundo, literal (e) de las condiciones generales de la póliza de responsabilidad civil extracontractual derivada de cumplimiento No. LB 408349 que se pretende afectar a través de la acción instaurada, se excluye de la cobertura de responsabilidad civil extracontractual el reconocimiento del DAÑO MORAL.

Delimitación legal y contractual a los perjuicios patrimoniales, consagrada en el artículo 1121 del C. Co. y en el numeral primero de la cláusula primera de las condiciones generales que rigen el contrato de seguro de responsabilidad civil extracontractual derivada de cumplimiento No. LB 408349. Así las cosas, dadas las limitaciones del texto legal y contractual, para que se entendiesen amparados tanto el daño moral como el daño a la vida de relación, sería necesario su estipulación específica dentro del contrato de seguro referido.

Limitación a la responsabilidad del asegurador hasta la concurrencia máxima del valor asegurado. Por cuanto dentro de la póliza de responsabilidad civil extracontractual derivada de cumplimiento No. LB 408349 se pactó como límite máximo asegurado para el amparo de predios, labores y operaciones la suma de \$393.198.031.20, valor este que se construye en el tope de responsabilidad que asumió en virtud del contrato asegurado y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1079 del C. Co.

Limitación de la responsabilidad del asegurador por existencia de deducible, que en este caso se pactó en la cláusula tercera y asciende a la suma de \$39.319.803.02, de modo que ante una eventual condena en contra, solo estaría obligada a responder por los valores que superen esta suma, o si la condena resulta inferior a dicho monto, deberá asumirla en su totalidad el asegurado.

Excepción común. Para que sean consideradas en la sentencia enunciadas de falta de derecho del demandante, inexistencia de responsabilidad por parte de la demandada, inexistencia de la obligación a indemnizar, alegación inadecuada de la fuente de responsabilidad, y toda aquella que constituya causal eximente de responsabilidad de la llamada en garantía.

5. MARLENE CONTRERAS CORTÉS (propietaria del vehículo) (Fol. 602 a 603 C-3). Por intermedio de la curadora ad-litem designada, manifestó lo siguiente:

Frente a las declaraciones y condenas, no se opone a que se declaren, teniendo en cuenta que es un hecho que la ley le da a quienes se crean lesionados en un derecho amparado por la ley.

En cuanto a los hechos de la demanda, manifiesta que deben probarse. No presenta excepciones de merito.

6. JULIO ERNESTO RINCÓN MARTÍNEZ (tenedor del vehículo). No presentó escrito de contestación de la demanda ni dentro ni fuera del término de traslado.

B - Alegatos de Conclusión y Concepto del Ministerio Público

Parte demandante (folios 2175 a 2190 C-6). Presenta sus alegatos de conclusión indicando en síntesis, que se encuentran acreditados los elementos de la responsabilidad extracontractual del Estado, esto es, el daño antijudicial, acreditado con los documentos que dan cuenta de la muerte de la señora CAROLINA LATORRE ALVAREZ – registro civil de defunción, necropsia, certificado de la Fiscalía Primera de San Gil del 20 de junio de 2012 y noticias periodísticas del diario Vanguardia del 31 de mayo y 1º de junio de 2012 – así como la destrucción de la motocicleta en la que se transportaba de lo que da cuenta el informe policial de accidente de tránsito del 30 de mayo de 2012, ratificado con la declaración rendida por el patrullero Duván Ramsey Carreño Rueda.

Frente al elemento de la atribución del daño a las demandadas indica que con la contestación de la demanda y pruebas allegadas por TRANSPORTES SARVI LTDA, se acredita que la contratista y responsable del transporte de carga fue TRANSPORTES JOALCO S.A., así mismo, con la contestación de la demanda y pruebas aportadas por ECOPETROL S.A., se demuestra que esta entidad pública efectivamente celebró el contrato de transporte MA-0009032 con TRANSPORTES JOALCO S.A. y aunque aduce en el numeral 2 de la cláusula sexta una presunta "indemnidad" en su favor respecto del transportador, ésta cláusula no le es inaplicable a terceros, es este caso, a los demandantes.

Es así, que el nexo causal entre ECOPETROL S.A. como propietaria-remitente y destinataria de la carga transportada – tubos de oleoductos - acreditada como contratante, y TRANSPORTES JOALCO S.A. empresa transportadora de la remesa, identificada en el manifiesto de carga No. 0453-08942916 y la remesa terrestre No. 050021848 del mes de mayo, está soportada en el contrato suscrito entre ellas, el cual nos remite a la normas propias de la contratación de ECOPETROL S.A., pero también a la normatividad civil y comercial, además de la aplicación de los principios de la contratación pública, tales como el de responsabilidad dispuesto en el artículo 26 de la Ley 80/93 según el cual, tanto las entidades contratantes, como contratistas, son responsables no solo por su oferta, sino por la calidad del servicio prestado, en este caso, cumpliendo las normas correspondientes al transporte y tránsito de cargas de gran dimensión en tamaño y longitud, por lo que tienen compromisos recíprocos entre sí con incidencia frente a terceros. Resalta que ECOPETROL S.A., en virtud del principio de responsabilidad debida, tenía la obligación de ejercer la supervisión e interventoría contractual, respecto de las obligaciones asumidas por TRANSPORTES JOALCO S.A. al tenor de lo dispuesto en los artículos 80 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

Es así, que el informe de tránsito, el registro fotográfico tomado por el agente de policía Duván Ramsey Carreño Rueda, el despliegue de las noticias por los periódicos regionales, el levantamiento del cadáver y la necropsia de la señora CAROLINA LATORRE ALVAREZ, entre otras pruebas, evidencian el incumplimiento de las normas de tránsito y transporte por parte de la transportadora TRANSPORTES JOALCO S.A. y su conductor asignado, el señor JAIRO ALFONSO JIMENEZ CHITIVA, quien se negó a rendir declaración sobre los hechos materia de debate.

Finalmente, manifiesta que, bajo estos parámetros, se encuentran evidencias probatorias de los regímenes o títulos de imputación del riesgo excepcional, falla del servicio y daño especial, sin que existan causas extrañas que desestimen las pretensiones. A su vez, se mantiene en la solicitud de reconocimiento económico a los demandantes y sustenta la tacha de falsedad de las declaraciones de los señores ELSA MOSQUERA LEÓN Y RAFAEL LATORRE BAYONA.

Parte demandada.

- TRANSPORTES JOALCO (folios 2159 a 2169 C - 6). Presenta sus argumentos finales manifestando, que el acervo probatorio obrante en el expediente es indicativo de la ausencia absoluta de responsabilidad como elemento necesario para que pueda deducirse la obligación indemnizatoria que reclama la parte demandante en contra de la empresa TRANSPORTES JOALCO S.A. entidad que no posee vínculo contractual alguno con el conductor Jiménez Chitiva, al no ostentar la calidad de empleador, guardián, propietario, poseedor, tenedor, ni afilador del vehículo por el comandado y en

consecuencia, no está llamada a responder como solicitada sea considerado en la decisión de fondo.

Indica que los medios de prueba acopiados no dan cuenta de las circunstancias que la parte actora aduce como presupuesto para reclamar el presunto daño, esto es, de que la muerte de la señora CAROLINA, haya ocasionado perjuicio alguno sobre el patrimonio o proyecto de vida – laboral, social, económico – de los actores.

Como fundamento de lo anterior, destaca el material probatorio consistente en duplicidad del registro civil de nacimiento de la menor LAURA SOFIA, quien con posterioridad al fallecimiento de su progenitora, aparece con el apellido paternal y no antes; la prueba trasladada de los despachos judiciales Segundo de Familia, Quinto de Familia y Séptimo de Familia de Bucaramanga, las declaraciones rendidas por las hermanas Nhora Isabel Vargas Galindo y Ruth Stella Tamayo suscritas ante el ICBF, la declaración de los señores Rafael Latorre, María Hela Merchán Basto y Sandro Milena Latorre ante el Juzgado Quinto de Familia del Circuito de Bucaramanga, el testimonio del señor Rafael Latorre rendido en el radicado de la referencia, así como un sinnúmero de pruebas documentales relacionadas con investigaciones en las que se denuncia el incumplimiento del deber legal y moral del demandante HENRY RESTREPO CUELLAR ara con las alimentantes LAURA SOFIA y MARYI DANIELA.

En consecuencia, la prueba que milita en la actuación no da cuenta de una relación causal que permita colegir la existencia del daño cuya reparación se solicita y menos de sufrimiento alguno padecido por los actores como consecuencia del deceso de la señora Carolina Latorre.

- TRANSPORTES SARVI LTDA (folios 2164 a 2172 C - 6). Presenta sus alegatos de conclusión indicando, en síntesis, que quedó demostrado dentro del plenario, que esta entidad no era la empresa afiliadora al momento del despacho, ya que dentro del expediente reposa prueba documental y testimonial del manifiesto de carga con el cual TRANSPORTES JOALCO S.A. despachó el vehículo de placas SUB-011 / por lo tanto había afiliación temporal a esta última para ese despacho.

A su vez indica, que se probó mediante interrogatorio al representante legal de TRANSPORTES JOALCO que la subordinación y la dependencia al momento del accidente objeto de la demanda se encontraba bajo dicha empresa, ya que fue contratada por ECOPETROL S.A. para llevar a cabo el desplazamiento de la carga y la que contrató el vehículo de placas SUB-011 para transportar la tubería. Igualmente se probó a través de este medio que TRANSPORTES JOALCO como empresa despachadora, era la que se estaba lucrando con el transporte de la carga en mención y que TRANSPORTES SARVI no intervino de ninguna forma en el mencionado negocio y no se estaba beneficiando del mismo.

A través de prueba documental e interrogatorio se demostró que TRANSPORTES SARVI no era la empresa afiliadora del vehículo al momento del accidente, ya que había afiliación temporal por parte de TRANSPORTES JOALCO. Igualmente se probó, que ésta última es la responsable del accidente por ser la empresa que ostentaba el control y la dirección del vehículo de placas SUB-011 al momento del accidente, en el entendido que fue la que lo contrató para realizar el viaje, pagándole el flete correspondiente y dándole todas las instrucciones tanto para el cargue, como para el descargue de la mercancía, obteniendo además un lucro por dicho transporte al tener un contrato con ECOPETROL para la movilización de la tubería.

A su vez, indica, que no se probó fehacientemente por parte de los demandantes, el lucro cesante, ya que no se aportó documentación que así lo evidenciara. Por el contrario, quedó demostrado que entre la señora CAROLINA LATORRE ALVAREZ y el señor HENRY RESTREPO CUELLAR, así como con los familiares de este último, no había ningún tipo de relación afectiva, sentimental o de otra índole que les pudiera causar un daño moral, o a la vida de relación con su muerte.

- ECOPETROL S.A. (folios 2164 a 2172 C - 61) Presenta sus alegatos de conclusión indicando en primer lugar que se presenta ausencia de legitimación en la causa por activa de parte de los señores LUCRECIA CUELLAR FIERRO, CARLOS AFREDO LOZADA CUELLAR, CLAUDIA JIMENA RESTREPO CUELLAR y el señor HENRY RESTREPO CUELLAR, quien solo demostro acreditar interes como representante legal de Maryi Daniela Restrepo Cuellar y Laura Sofia Restrepo Cuellar quedando demostrado que era su progenitora quien se encontraba exclusivamente a su cargo y cuidado. A esta conclusión se llega de la valoración de las pruebas documentales y testimoniales practicadas en audiencia del 5 de marzo de 2019

Ahora bien, frente al eventual grado de responsabilidad de ECOPETROL S.A. en los hechos objeto de controversia, en su condición de remitente de las mercancías transportadas por la empresa JOALCO S.A., se tiene que el objeto social de las dos empresas difiere, por cuanto ECOPETROL S.A. no cuenta con habilitación para prestar el servicio público de transporte de mercancías, por lo que desde el ámbito legal, su responsabilidad se limita a velar por contratar la realización del servicio con una empresa con capacidad legal, especializada y experta en la materia, para este caso, el transporte de carga.

Así las cosas, la idoneidad del contratista TRANSPORTES JOALCO S.A. esta plenamente probada en el proceso, con la justificación emitida por ECOPETROL vista en el contrato denominado MA-0009632-FASE PRECONTRACTUAL-0E492328 entregado por ECOPETROL S.A. en respuesta al oficio 1518 2014 00102.

A su vez, está plenamente probado en el proceso que ECOPETROL S.A. y TRANSPORTES JOALCO S.A. acordaron entre otras obligaciones en el contrato MA-0009632 suscrito el 19 de abril de 2012 que el contratista se obliga entre otras, a efectuar con responsabilidad y plena autonomía administrativa, operativa, técnica y directiva el manejo de la carga, así como a cumplir las disposiciones legales vigentes. Así mismo, se encuentra determinada la responsabilidad del contratista sobre los productos objeto de transporte, y sobre los daños a personas, equipos, datos o programas de acuerdo a la cláusula sexta de dicho instrumento.

Se encuentra probado que, en representación de ECOPETROL S.A. la gestora técnica aprobó los vehículos presentados por TRANSPORTES JOALCO S.A. también, que el conductor Jiménez Chitiva Jairo Alfonso, contratado por ésta última, se encontraba capacitado y contaba con la experiencia en manejo de vehículos de transporte debidamente acreditada. Igualmente, que el servicio contratado por ECOPETROL S.A. cumplió a cabalidad con la regulación establecida en la Resolución 4100 de 2004, reformada por la Resolución 1762 de 2009; además, que la empresa TRANSPORTES JOALCO S.A. constituyó y acreditó entre otras, garantía de cumplimiento de responsabilidad, y que dicha empresa junto con sus aseguradoras, han formalizado acuerdos de conciliación con familiares y otras víctimas del incidente, lo que evidencia el reconocimiento y fuerza vinculante entre las partes de los términos de la cláusula de responsabilidad por daños, formalizada en el contrato suscrito con ECOPETROL S.A., que se ratifica en el interrogatorio de parte hecho al representante legal de TRANSPORTES JOALCO S.A., donde al finalizar expresa, que resultaría injusta una eventual condena en el presente caso contra ECOPETROL S.A.

Así las cosas, en los términos y la ejecución contractual, es claro que ECOPETROL S.A., reconoció la total autonomía para la realización de las actividades a la parte contratista dentro de los parámetros de responsabilidad expuestos por la normativa correspondiente, y por lo mismo, son el contratista, el propietario y el conductor, los responsables de los eventos que se generen durante el desarrollo del contrato de transporte, la cual no se extiende legalmente a ECOPETROL S.A., por cuanto actúa como un simple remitente de mercadería y no está obligado a responder extracontractualmente por los daños derivados de una acción u omisión del transportador del vehículo tracto camión.

Finalmente indica, que no hay lugar a que se condene a ECOPETROL S.A. por los eventuales perjuicios que se causaron con ocasión del fallecimiento de la señora CAROLINA LATORRE, por cuanto de acuerdo con el acervo probatorio, se logra

señalar que no existía relación de fraternidad y apoyo entre el señor HENRY RUIZ FREPO CUELLAR y sus familiares con la madre de sus hijas

LINE CONTRERAS CORTES No presentó escrito de alegatos de conclusión

O ERNESTO RINCÓN MARTÍNEZ, No presentó escrito de alegatos de conclusión

Acta la en garantía

- Liberty Seguros S.A. (Fol 2153 a 2158 C-6) Presentó sus alegatos de conclusión reiterando los argumentos y excepciones expuestos en la contestación de la demanda y del llamamiento en garantía respectivamente. De esta manera insiste en la ausencia de responsabilidad del asegurador en relación con el amparo contratado bajo la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. LB-332654, la limitación de la responsabilidad frente al daño moral con base en el contrato de seguro, la delimitación legal y contractual de los perjuicios patrimoniales por la cláusula primera del contrato de seguro, la limitación de la responsabilidad del asegurador hasta la concurrencia máxima del valor asegurado y no más allá, la delimitación de la responsabilidad del asegurados por reducción del valor asegurado y la limitación de la responsabilidad del asegurador por existencia de deducible.

As mismo, presenta un argumento de inexistencia, indebida valoración y ausencia de prueba de los perjuicios extra patrimoniales pretendidos, es así que en lo que respecta al daño moral, su cuantía excede notoriamente las pautas que para el efecto ha fijado la jurisprudencia. Frente al daño a la vida de relación expresa que el Consejo de Estado lo ha excluido, dejando únicamente el daño moral, el daño a la salud y la afectación grave y relevante a bienes constitucional y convencionalmente protegidos.

Ministerio Público No presentó concepto de fondo

III. CONSIDERACIONES

A - Problema Jurídico

Conforme fue planteado en la fijación del litigio, corresponde al Juezado establecer si *¿En el presente asunto lo asiste o no, responsabilidad administrativa a la parte demandada, por los presuntos perjuicios causados a los demandantes, con ocasión del fallecimiento de la señora Carolina Lafont Álvarez, en accidente de tránsito ocurrido el treinta (30) de mayo de dos mil doce (2012) sobre la avenida Rayonessi de San Gil – Santander km 0+800 mts?*

En caso afirmativo, deberá establecerse si en el presente asunto *¿el llamado en garantía deberá concurrir en el pago de la posible condena, y si es del caso, en que calidad y porcentaje debe hacerlo?*

B - Marco Jurídico y jurisprudencial

1. Régimen de responsabilidad del Estado

El artículo 90 de la Constitución Política de 1991, consagra lo referente a la responsabilidad del Estado, indicando que la administración *“responderá por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas”*. Es decir que desde la perspectiva constitucional se previó una fórmula general de responsabilidad tanto contractual como extracontractual por acción u omisión de las ramas del poder público.

De la norma constitucional en cita se puede concluir que para imputar responsabilidad a la administración es necesario verificar la existencia de un daño antijurídico, es decir, aquel que la persona no estaba en obligación de soportar, así como efectuar un juicio de imputación, a fin de determinar si jurídica y fácticamente es atribuible a la entidad demandada, o si por el contrario se configura una causal de exoneración de responsabilidad – fuerza mayor, caso fortuito, hecho exclusivo de la víctima y/o hecho exclusivo y determinante de un tercero – así como la concurrencia de culpas en la producción del daño.

En el régimen subjetivo de responsabilidad como sistema clásico de imputación impera la tesis de la culpa, falta o falla del servicio, a través de la cual se pretende indemnizar los perjuicios causados por el incumplimiento de las obligaciones a cargo del Estado, o lo que es lo mismo, consiste en la causación de un daño por una persona de derecho público que no ha actuado como debía hacerlo¹.

De igual forma, el Consejo de Estado ha establecido un régimen de responsabilidad sin culpa u objetiva², que se aplica de forma residual a la falta del servicio y puede darse en dos supuestos: bien por haberse causado por el rompimiento de la carga pública de igualdad – daño especial – o un daño anormal – riesgo excepcional³ – esto es, bajo una óptica objetiva de responsabilidad.

En este caso, es a la luz del régimen de imputación de falta del servicio que procederá el despacho a verificar la existencia de los elementos de la responsabilidad, no sin antes hacer una salvedad acerca de las actuaciones traídas de otros procesos que se adelantaron y que interesan en la resolución de la presente Litis.

2. Valor probatorio de la prueba trasladada

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 211 de la Ley 1437 de 2011, en los procesos que se adelanten ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en lo que no esté expresamente regulado en dicho Código, se aplicarán en materia probatoria las normas del Código de Procedimiento Civil⁴, entendiéndose hoy CGP.

Sobre la prueba trasladada el artículo 174 del Código General del Proceso dispone lo siguiente:

Respecto de daño antijurídico, el Código Constitucional la define de la siguiente manera: "daño antijurídico, es el daño antijurídico, es el perjuicio provocado a una persona que no tiene el deber jurídico de soportar, que coincide con la acción demandada por el Consejo de Estado" (Aceptación al artículo 174 de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo (Ver, entre otros, Corte Constitucional, Sentencia de 11 de febrero de 1996, Magistrado Ponente Dr. Alejandro Martínez Caballero, Sentencia C-430 de 2009, Magistrado Ponente Dr. Antonio Barrera Gamboa, Sentencia C-892 de 2001, Magistrado Ponente Dr. Rodrigo Escobar Gil).

La jurisprudencia del Consejo de Estado ha decantado una serie de elementos, del cual, para que sea resarcido: 1. Un daño antijurídico, esto es, que la persona no tenga el deber jurídico de soportarlo; 2. Que sea cierto, es decir, que se pueda acreditar material y jurídicamente, y por ende se cause una lesión a un derecho; 3. Que se tenga legitimidad que se encuentre dentro del ámbito jurídico; y 3. Que sea personal, es decir, que sea padecido por quien lo reclama (Ver, entre otros, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia de 12 de marzo de 2012, Consejero Ponente Dr. Enrique Gil Botero, Rad. No. 05001-23-25-000-1954-0014-01021850; Sentencia de 14 de marzo de 2012, Consejero Ponente Dr. Enrique Gil Botero, Rad. No. 05001-23-25-000-1954-0014-01021850).

¹ Ver Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia de 22 de octubre de 2012, Consejero Ponente Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, Rad. No. 05001-23-01-000-2000-0247-01043131.

² Rodríguez L. (2002). *Derecho Administrativo General y Contencioso*, 1ª edición. Editorial Temis S.A., Bogotá, D.C.

³ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia de 12 de marzo de 2012, Consejero Ponente Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, Rad. No. 05001-23-01-000-2000-0247-01043131.

En el mismo sentido ver Sentencia de 17 de febrero de 2010, Consejo de Estado, Ponente Dr. Jaime Brander Gutiérrez, Rad. No. 05001-23-01-000-1966-010279-01010134.

⁴ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia de 10 de marzo de 2012, Consejero Ponente Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera, Rad. No. 05001-23-01-000-1966-0247-01022300.

En aquellos eventos en los cuales los administrados sufren daños como consecuencia del proceder legítimo de las autoridades públicas, la jurisprudencia de esta Corporación ha declarado la responsabilidad de la administración por fundamento en el resquecimiento objetivo de daño especial, es decir, cuando la conducta desarrollada por la entidad pública es lícita, regular y usada al ordenamiento jurídico y empujados a ello por el deber de cumplir con el deber de Estado, lo que genera un perjuicio a los administrados, pero que no es el resultado de una conducta ilegítima o arbitraria, sino que es el resultado de una conducta lícita y regular que en su estructura son propios, de modo que si se demuestra que la conducta es lícita y regular, no se requiere que se demuestre que los administrados sufrieron un perjuicio de tipo especial.

⁵ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia de 10 de marzo de 2012, Consejero Ponente Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, Rad. No. 05001-23-01-000-1966-0247-01022300.

Se aplica el resquecimiento objetivo cuando el daño proviene de la realización de una conducta legítima, regular y usada al ordenamiento jurídico, que en su estructura son propios, de modo que si se demuestra que la conducta es lícita y regular, no se requiere que se demuestre que los administrados sufrieron un perjuicio de tipo especial.

Artículo 174 Prueba trasladada y prueba extraprocesal. Las pruebas practicadas válidamente en un proceso podrán trasladarse a otro en el que se las apreciadas sin más formalidades, siempre que en el proceso de origen se hubiere practicado a petición de la parte contra quien se aducen o con audiencia de ella. En tal caso, no obstante, deberá surtirse la contradicción en el proceso al que están trasladadas, la que se aplicará a las pruebas extraprocesales.

La violación de las pruebas trasladadas y el incumplimiento de las obligaciones de sus consecuencias jurídicas corresponderán a quien se le imputa la conducta.

Así las cosas, con la presentación de la demanda, se solicitó como prueba, oficiar a la Fiscalía Delegada Primera ante los Juzgados Penales del Circuito Judicial de San Gil, para que expidiera copia auténtica del proceso No. 686796000153201200159 en el que se investiga la muerte de la señora Carolina Latorre Álvarez.

Frente a la anterior solicitud, el despacho en audiencia inicial accedió a la petición, mediante auto proferido y notificado en estrados en la diligencia, sin que existiera oposición por parte de las entidades demandadas.

A su vez, con la contestación de la demanda, la sociedad Transportes JOALCO S.A. solicitó como prueba, oficiar a los Juzgados Segundo, Quinto y Séptimo de Familia de Bucaramanga para que expidieran copia auténtica de los procesos No. 2010-00465, 2012-0510 y 2013-0037. Igualmente, solicitó que se oficiara al Grupo Gaula de la Fiscalía de Bucaramanga o al Despacho Judicial donde se encuentre el expediente, para que remitiera copia de los documentos que obran como prueba dentro del proceso No. CUI-6800160001602012005553 en contra de Henry Restrepo Cuellar por el presunto delito de secuestro simple, derivado de los hechos ocurridos el 02 de junio de 2012.

La llamada en garantía Liberty Seguros S.A., solicitó se oficiara a la Fiscalía Séptima Local de Bucaramanga y a la Fiscalía Diecinueve Local de Bucaramanga para que se allegara copia del expediente que incluyera todas las actuaciones y pruebas testimoniales y documentales practicadas y aportadas dentro del trámite procesal radicado 6800160001602012005553 por fraude procesal y el 6800160001602012005579 por asistencia alimentaria que se siguen contra Henry Restrepo Cuellar.

El decreto de las anteriores pruebas quedó supeditado hasta tanto las partes interesadas indicaran lo que pretendían demostrar con las mismas. Es así, que en acatamiento de lo indicado por el despacho, las entidades se pronunciaron, aclarando el objeto de su solicitud, razón por la cual, a través de auto del 13 de febrero de 2018 este despacho procedió a su decreto a través de auto notificado en estrados publicados el 14 de febrero de 2018, contra el cual no fue interpuesto recurso alguno por la partes a quienes se les informó a través de correo electrónico (Fol. 1314-1315 cuaderno 4).

De esta manera, recaudada la copia de la investigación penal adelantado por la Fiscalía Delegada Primera ante los Juzgados Penales del Circuito Judicial de San Gil radicada bajo el No. 686796000153201200159, la cual fue allegada al despacho 30 de noviembre de 2017 (Fol. 1024 - 1252 cuaderno 5) así como las copias las actuaciones y pruebas testimoniales y documentales practicadas y aportadas dentro del trámite procesal radicado 6800160001602012005553 por fraude procesal las cuales se recibieron el 12 de marzo de 2018 (Fol. 1347 - 1371 cuaderno 4) las copias del proceso de regulación de alimentos iniciado por la señora Carolina Latorre Álvarez en contra del señor Henry Restrepo Cuellar allegadas el 12 de marzo de 2018 (Fol. 1372-1474 cuaderno 4) las copias del proceso llevado en el Juzgado Quinto de Familia de Bucaramanga, radicado bajo el número 68001311100520120051000 que se allegaron el 10 de marzo de 2018 (Fol. 1475-1617 cuaderno 5) la documentación tramitada bajo el número 680016109061201280036 en la Fiscalía Primera delegada Gaula de Bucaramanga adelantada contra Henry Restrepo Cuellar por el delito de secuestro simple, allegada el 20 de marzo de 2018 (Fol. 1618-1651 cuaderno 5) la copia del proceso radicado bajo el número 6800160001602012005579 tramitado en la Fiscalía 19 local de Bucaramanga allegada el 23 de marzo de 2018 (Fol. 1652-1670 cuaderno 5) y copia del proceso radicado 2013-00037 en el que se discutía la

... de las menores Mary Daniela y Laura Sofia Restrepo Latorre allegado por Juzgado Primero de Familia de Bucaramanga el 23 de abril de 2018 (Fol. 1626-2024 cuadernos 5 y 6), transcurrido un tiempo prudencial desde su entrega ante la secretaria del despacho para su conocimiento por las partes, mediante auto de 02 de agosto de 2018 se recaudó, insertó y se corrió traslado de las pruebas documentales decretadas en audiencia inicial y en el auto del 13 de febrero de 2018 - entre las cuales se encontraban los documentos descritos - las partes no emitieron consideración u oposición a lo recaudado.

Así las cosas, las partes en el trámite procesal aceptaron que estos documentos fueran tenidos en cuenta y coincidieron en la valoración de los mismos en forma recíproca, pues no fueron tachados ni al momento de allegarlos al planario probatorio ni durante el transcurso del debate procesal.

3. De la tacha de falsedad de los testimonios rendidos por los señores Elsa Mosquera y Rafael Latorre Bayona

El apoderado de la parte demandante en el escrito de alegatos de conclusión tacha de sospechosos y carentes de credibilidad los testimonios rendidos por los señores Elsa Mosquera y Rafael Latorre Bayona, teniendo en cuenta el grado de amistad y parentesco que los unía con la señora Carolina Latorre Álvarez.

Aduce que es claro que estos dos testigos socializaron y compartieron lo que después declararon al despacho, tratando de estigmatizar y deslegitimar al demandante Henry Restrepo Cuellar y a su familia con el fin de arrogarse la representación de las menores Mary Daniela y Laura Sofia Restrepo Latorre y con ello la posibilidad de recibir las indemnizaciones por el fallecimiento de la señora Carolina Latorre Álvarez.

Al respecto, el artículo 211 del C.G.P., norma a la que se acude por disposición expresa del artículo 211 de la Ley 1437 de 2011 dispone:

Artículo 211. Imparcialidad del testigo. Cualquiera de las partes podrá tachar el testimonio de las personas que se encuentren en circunstancias que afectan su credibilidad o imparcialidad, en razón de parentesco, dependencias, sentimientos o interés en relación con las partes o sus apoderados, antecedentes personales o otras causas.

La tacha deberá formularse con expresión de las razones en que se funda. El juez analizará el testimonio en el momento de fallar de acuerdo con las circunstancias de cada caso.

En el caso particular, observa el despacho que el apoderado de la demandante se limitó a formular la tacha contra los testigos, pero no aportó ninguna prueba que permitiera verificar la ocurrencia de los hechos que le sirvieron de fundamento, o demostrar los motivos de la sospecha y su relación con las demás pruebas recaudadas, es decir, no se aportó prueba alguna que permita sospechar que los testigos se hayan puesto de acuerdo para ofrecer un relato similar al despacho, además porque es claro que cada uno de ellos convivió con la señora Carolina Latorre Álvarez en épocas y lugares diferentes, por lo que es imposible que los relatos de lo que vivieron con ella sean similares.

Finalmente, si bien existen lazos de consanguinidad entre el testigo Rafael Latorre Bayona y la señora Carolina Latorre Álvarez, así como lazos de amistad entre ésta última y la señora Elsa Mosquera, esta sola circunstancia no conduce necesariamente a deducir que ellos inmediatamente falten a la verdad, sino que lo conducente es apreciar sus relatos con mayor severidad en el momento que así se requiera.

Así las cosas, considera el despacho que la tacha de sospecha presentada por la parte demandante no está llamada a prosperar.

4. Del presupuesto procesal de la legitimación en la causa material

4.1 De la legitimación en la causa por activa

Teniendo en cuenta que la legitimación de los demandantes HENRY RESTREPO CUELLAR, LUCRECIA CUELLAR FIERRO, CARLOS ALFREDO LOSADA CUELLAR y

REPOSICION
REPARACIÓN DIRECTA
REPRESENTANTE
HENRY RESTREPO CUELLAR Y OTROS
DEMANDADO
FIDUCITROL S.A. Y OTROS
DEMANDA G
LIBERTY SEGUROS S.A

CLAUDIA JIMENA RESTREPO CUELLAR ha sido objetada por la demandada TRANSPORTES JOALCO S.A. y la llamada en garantía LIBERTY SEGUROS S.A. previo a desatar el problema jurídico, procede el Despacho a resolver lo pertinente

Frete al tema de la legitimación, es importante detenerse en los pronunciamientos del H Consejo de Estado en los que ha instruido con claridad el tema¹

... dado que la legitimación en la causa de hecho alude a la relación procesal existente entre demandante legitimado en la causa de hecho por activa y demandado legitimado en la causa de hecho por pasiva... y cuando la relación procesal no se desvirtúa y con la verificación del auto admisorio de la misma o quien asuma la posición de demandado, una vertiente de la legitimación procesal se traduce en facultar a los sujetos imputados para intervenir en el trámite del pleito y para ejercer sus derechos de defensa y de contradicción, la legitimación material en cambio, supone la conexión entre las partes y los hechos constitutivos del litigio, ora porque restituyan perjudicados, ora porque deban reparar la producción del daño. De ahí que un sujeto pueda estar legitimado en la causa de hecho para ser oído de legitimación en la causa material, lo cual ocurrirá cuando a pesar de ser parte dentro del proceso no quede relación alguna con los intereses inmersos en el mismo, por no tener conexión con los hechos que motivaron el litigio, evento éste en el cual las pretensiones formuladas ostentan llamadas a trabasar puesto que si demandante careciera de un interés jurídico perjudicado y susceptible de ser resarcido o el demandado no sería el llamado a reparar los perjuicios consumados a los actores... En suma, en un sujeto procesal que se encuentra legitimado de hecho en la causa no necesariamente concurrirá al mismo tiempo legitimación material, pues ésta solamente es predecible respecto de quienes participaran realmente en los hechos que han dado lugar a la instauración de la demanda o, en general, respecto de los titulares de las correspondientes relaciones jurídicas sustanciales, por consiguiente, el análisis sobre la legitimación material en la causa se centra a elucidar si existe o no relación real de la parte demandada o de la demandante con la pretensión que ésta formula o la defensa que aquella realiza, pues la existencia de tal relación constituye condición anterior y necesaria para dictar sentencia de mérito favorable a una o a otra... En consonancia con lo anterior, se ha indicado que la falta de legitimación en la causa no impide al fallador pronunciarse de fondo sobre el petitorio de la demanda, cualquiera que la aludida legitimación constituya un elemento de la pretensión y no de la acción, en la medida en que se trata de una condición propia del derecho querencial y no una condición procesal que, cuando no se cumple directamente contra el demandado, constituye razón suficiente para denegar el proceso adelantado a los intereses del demandante por no encontrarse demostrada la imputación del daño a la parte demandada'

En el caso particular, el señor HENRY RESTREPO CUELLAR, obra en nombre propio, en calidad de ex compañero permanente de la señora Carolina Latorre Álvarez, y como representante de sus hijas MARYI DANIELA y LAURA SOFÍA RESTREPO LATORRE

La demandante LUCRECIA CUELLAR FIERRO actúa en su calidad de ex suegra de la señora Carolina Latorre Álvarez y abuela paterna de las señoras MARYI DANIELA y LAURA SOFÍA RESTREPO LATORRE.

Finalmente, los señores CARLOS ALFREDO LOSADA CUELLAR y CLAUDIA JIMENA RESTREPO CUELLAR, obran en calidad ex cuñados de la señora Carolina Latorre Álvarez y tios paternos de las señoras MARYI DANIELA y LAURA SOFÍA RESTREPO LATORRE.

Así las cosas, el señor HENRY RESTREPO CUELLAR pretende demostrar su legitimación material adjuntando copia de los registros civiles de nacimiento de LAURA SOFÍA RESTREPO LATORRE y MARYI DANIELA RESTREPO LATORRE, visibles a folios 63 y 64 del cuaderno 1, en los que se observa que registra como padre de las mismas. Así mismo, obra registro civil de nacimiento de los señores CARLOS ALFREDO LOSADA CUELLAR, CLAUDIA JIMENA LOSADA CUELLAR y HENRY RESTREPO CUELLAR, que los acredita como hermanos entres sí e hijos de la señora LUCRECIA CUELLAR FIERRO (Fol. 67-69 cuaderno 1)

¹ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del 13 de febrero de 2017, por el Jefe de Sala Dr. Hernán Andrés Rincón, Rad. No. 25000-23-26-000-2014-00024-01120026.

En relación con los registros civiles de nacimiento de las señoritas MARYI DANIELA y LAURA SOFIA RESTREPO LATORRE, los mismos no dejan duda de su legitimación material en la presente causa, pues acreditan el vínculo de consanguinidad que las unía con la víctima directa, señora Carolina Latorre Álvarez. (Fol. 63-64 cuaderno 1)

Ahora bien, frente al señor HENRY RESTREPO CUELLAR, no se observa dentro del plenario prueba que demuestre la convivencia o la naturaleza de la relación que al momento del fallecimiento de la señora Carolina Latorre Álvarez sostenían y que según el escrito de demanda era cordial, respetuosa y solidaria; por el contrario, de los testimonios rendidos por los señores Sandra Milena Latorre Álvarez, Rafael Latorre Bayona y Elsa Mosquera León, en audiencia de pruebas celebrada el 5 de marzo de 2019 (Fol. 2126 cuaderno 6), los cuales son concurrentes en afirmar que la relación sentimental que tuvieron se desarrolló primero en Bucaramanga y después en la ciudad de Neiva, a donde la señora Carolina viajó con el propósito de convivir con el señor Henry, no obstante, su relación terminó cuando estaba en gestación la segunda de las hijas que procrearon -Laura Sofía Restrepo Latorre-, sin que éste último le suministrara algún tipo de ayuda o afecto después de esto, permiten establecer que su fallecimiento no le causó daño inmaterial o material alguno de los que reclama a través de este medio de control.

Frente a ello y como testigo presencial y directo, acudió la señora Elsa Mosquera León, quien afirmó que conoció a la señora Carolina Latorre Álvarez en la ciudad de Neiva, en una situación precaria, sola, con una niña pequeña y en estado de embarazo, viviendo en un barrio periférico de la ciudad, a donde la hermana y cuidadora de la testigo le llevaban alimentos. Es así que motivada por su espíritu altruista decidió llevar a Carolina en estado de embarazo, y a su pequeña hija a vivir a su residencia, costear los gastos médicos que conllevaron el embarazo y posterior parto de Laura Sofía. De esta manera, la occisa siguió viviendo con la señora Elsa Mosquera junto a sus dos pequeñas hijas, por espacio de dos años, esto es, entre el año 2001 y el 2003 cuando, luego del bautizo de Laura Sofía, regresó a vivir con su padre -Rafael Latorre Bayona- a la ciudad de Bucaramanga. Afirmó que le consta que Carolina mencionaba a Henry, pero nunca lo conoció, nunca fue a visitarla, nunca le colaboró con nada. Cuando Carolina regresó a Bucaramanga, la testigo continuó ayudándole económicamente por espacio de unos meses. (Fol. 2126 cuaderno 6, minuto 01:00:55 a 01:26:35).

La señora Sandra Milena Latorre Álvarez, quien fue testigo directo de la situación de Carolina y lo que tiene que ver con la relación que sostuvo con el señor Henry Restrepo Cuellar, afirmó que ellos se conocieron y fueron novios, luego de lo cual, él se la llevó para Neiva, pero la relación no duró ni dos años, pues cuando Carolina estaba embarazada de su segunda hija -cuatro meses de gestación-, se separaron, tan es así, que Henry no le dio el apellido a la segunda niña -Laura Sofía-, es más, él se casó con otra persona durante el embarazo de Laura Sofía, por lo no que no vio de ellas.

Afirma que cuando Carolina se devolvió para Bucaramanga, esto es, cuando Laura Sofía tenía más de un año de vida y Maryi Daniela 3 años, Carolina y Henry no tenían ninguna relación amorosa, es más, no tenían ningún tipo de relación en buenos términos, porque cuando Carolina lo llamaba a pedirle dinero para el sostenimiento de sus hijas, él se negaba, de hecho, ella tuvo que demandarlo por alimentos, pues Henry le pedía favores sexuales a cambio de enviarle el sustento que le correspondía a sus hijas. Esto le consta, debido a que Carolina regresó a vivir en la casa paterna que compartían, además, le contó que cuando se separó de Henry estando en Neiva, quien la sostuvo, le pagó el parto y le ayudó con el cuidado de las niñas fue la señora Elsa quien además es la madrina de Sofía.

Es por ello que afirma que no es posible que Henry y su familia se hagan las víctimas si cuando Carolina necesitó realmente ayuda en Neiva, ninguno de ellos apareció a socorrerla, ninguno de ellos le prodigó ayuda alguna o afecto, fue una persona ajena a la familia -Elsa Mosquera León- quien lo hizo.

Frente a la relación actual de Henry con sus hijas, indicó que es una relación normal, no es muy cercana, él las llama de vez en cuando, en vacaciones de fin año ellas iban a Neiva, pero el último año no quisieron viajar, pues su padre no está pendiente de ellas.

DEMANDANTE
DEMANDADO
ABOGADO

REPARACIÓN DIRECTA
HENRY RESTREPO CUELLAR Y OTROS
EGOPETROL S.A. Y OTROS
LIBERTY SEGUROS S.A.

afirma que durante los 10 u 11 años que transcurrieron desde la separación de Carolina y Henry, el sólo visitó a sus hijas una vez, no les mandaba dinero para su sostenimiento. Es más, después de haberse resuelto lo relativo a la custodia y alimentos de las niñas Henry apeló la decisión para que redujeran la cuota, lo cual en efecto ocurrió (Fol. 2126 cuaderno 5 minuto 01:56:26 a 02:23:26).

En relación con la señora Lucrecia Cuellar Fierro afirma, que producto de la demanda de alimentos que Carolina interpuso en contra de Henry, la señora Lucrecia se comunicó con ella para convencerla de retirarla, por lo que de ahí en adelante y por espacio de un año aproximadamente, la señora Lucrecia le envió ayuda económica a sus nietas, después de eso no más.

En cuanto al testimonio rendido por el señor Rafael Latorre Bayona, afirma que sólo vio a Henry en dos oportunidades, una, cuando Carolina tenía alrededor de 16 años y él la visitó en la puerta de su casa, y la otra, después del fallecimiento de Carolina. Nunca existió ninguna clase de trato o amistad con Henry. A título personal le consta, que después de la muerte de Carolina, Henry fue a Bucaramanga a visitar a las niñas LAURA SOFÍA y MARYDANIELA, por lo que lo fue bien recibido pensando que lo estaba haciendo de corazón, pero en un acto abusivo se las llevó para Neiva e incluso registró a Laura Sofía con su apellido, pues antes de eso, no la había reconocido como su hija. De esta manera, el testigo afirma que tuvo que interponer denuncia por secuestro en contra de Henry y luego de que la Fiscalía hiciera la conexión, viajó a Gigante (Neiva) a traer de nuevo a las niñas. - esta afirmación queda demostrada con la copia del proceso penal adelantado por el señor Rafael Torres Bayona en contra de Henry Restrepo Cuellar por el delito de secuestro simple, allegado por la Fiscalía 19 Local de Bucaramanga (Fol. 1658-1676 cuaderno 5). Después de eso solicitaron que la custodia de las niñas quedará bajo su hija mayor Sandra Milena Latorre, quien actualmente la tiene. Le consta que los gastos de las menores las suplía Carolina, quien luego de llegar de Neiva incluso tuvo otra pareja con quien además procreó un hijo (Fol. 2126 cuaderno 6 minuto 01:29:50 a 01:55:46).

En este orden de ideas, y específicamente frente a la legitimación material del señor HENRY RESTREPO CUELLAR que aquí se discute, la H. Corte Constitucional ha señalado, que la calidad de compañero permanente no se encuentra sujeta a formalismos, sino que basta con la intención, singularidad y compromiso de una persona para constituir una comunidad de vida permanente.

Así las cosas, no puede considerarse un imperativo normativo para demostrar la existencia de la unión marital de hecho la exigencia de la prueba de los dos años de convivencia que dispone el artículo 2º de la Ley 54 de 1990. Toda vez que se trataría de una interpretación restrictiva y literal que contraría los preceptos constitucionales y legales vigentes que garantizan igualdad de condiciones para todos los miembros de la familia.

Conforme a lo anterior, el Despacho considera que en este caso, la calidad de compañero permanente del señor HENRY RESTREPO CUELLAR con la víctima directa, CAROLINA LATORRE ÁLVAREZ no se encuentra acreditada, pues los testimonios que obran en el proceso son suficientes para aclarar que la relación sentimental que sostuvieron, se rompió alrededor de 10 a 11 años antes del deceso de la señora Carolina Latorre Álvarez, tiempo durante el cual ésta última vivió en la ciudad de Bucaramanga y el municipio de San Gil, lugares en donde no se acreditó que el señor Henry pernoctara. Así mismo, se puede verificar que la señora Carolina Latorre Álvarez no convivió con los señores CARLOS ALFREDO LOSADA CUELLAR, CLAUDIA JIMENA LOSADA CUELLAR y LUCRECIA CUELLAR FIERRO, y que no tenía ninguna relación cercana con los mismos. Es más, está claro, que durante el tiempo que Carolina Latorre Álvarez vivió en la casa de la testigo Elsa Mosquera León en la ciudad de Neiva, ni Henry, ni ninguno de sus familiares fue a visitarla o le prestó ayuda o afecto alguno a ella o a sus menores hijas. Así mismo, cuando se trasladó a la ciudad de Bucaramanga, no tenía ninguna clase de acercamiento con los demandantes - Carlos Alfredo Losada Cuellar, Claudia Jimena Losada Cuellar, Lucrecia Cuellar Fierro y Henry Restrepo Cuellar - solamente cuando presentó demanda de

Corte Constitucional, Sentencia T-153 de 2014, M.P. Mauricio González Cuervo.

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Consejo de Estado
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander

Página 1 de 22

Así las cosas, para la demanda para sus hijas, fue que la señora Lucrecia la contactó y le prestó apoyo económico a sus nietas por un determinado tiempo, situación que no acredita la existencia de una relación cercana y la señora Lucrecia Cuellar Fierro existiera relación afectuosa alguna.

Por lo tanto, en lo que tiene que ver con las declaraciones extra juicio que se aportaron al proceso, es decir, las abuelas que fueron rendidas dentro del proceso de custodia y cuidado personal de las menores Mary, Daniela Restrepo Latorre, Laura Sofía Restrepo Latorre y Juan David Sánchez Latorre, hijos de la señora Carolina Latorre Álvarez, adelantando por la señora Sandra Milena Latorre Álvarez, se puede corroborar que el señor Henry Restrepo no tuvo ninguna relación cercana con la señora Carolina Latorre Álvarez y sus hijas, hasta el fallecimiento de la señora Carolina, cuando tuvo un acercamiento con ellas, el cual, no resultó ser grato para las menores (Fol. 1734-1737 cuaderno 5 y Fol. 1885-1890 cuaderno 6).

De los documentos que obran en el proceso tampoco puede verificarse la convivencia o relación cercana entre la señora Carolina Latorre Álvarez y los demandantes Carlos Alfredo Losada Cuellar, Claudia Jimena Losada Cuellar, Lucrecia Cuellar Fierro y Henry Restrepo Cuellar, así como tampoco quedó debidamente acreditado y probado que con éste último, la señora Carolina hubiera mantenido una relación en las condiciones de socorro, permanencia y ayuda mutua.

Así las cosas, a partir del análisis en conjunto de las pruebas, y del estudio tanto de los testimonios rendidos en el proceso, como las declaraciones recibidas extrajudicial, el despacho observa que pese a haber procreado a Mary, Daniela Restrepo Latorre y a Laura Sofía Restrepo Latorre, la señora Carolina Latorre Álvarez y Henry Restrepo Cuellar, no tenían ningún tipo de relación y entre ellos no existían sentimientos de afecto como se indica en los hechos de la demanda, debido a que el señor Henry no prestó el apoyo económico y afectivo a sus hijas por lo menos desde que Carolina se encontraba en embarazo de su segunda hija, cuando se separaron, esto es, entre 10 a 11 años antes de su fallecimiento.

Así las cosas, para el Despacho es claro que los demandantes - *Carlos Alfredo Losada Cuellar, Claudia Jimena Losada Cuellar, Lucrecia Cuellar Fierro y Henry Restrepo Cuellar* -, no se encuentran legitimados en la causa por activa para actuar dentro del proceso de la referencia; en consecuencia, en caso de que se acceda a las pretensiones de la demanda, el reconocimiento económico que corresponda a las demandantes legitimadas, señoritas Mary, Daniela Restrepo Latorre y Laura Sofía Restrepo Latorre se pagará directamente a ellas en caso de que hayan cumplido la mayoría de edad (a través de apoderado judicial que represente sus intereses), o en caso contrario, a través de quien para el momento tenga a cargo su custodia legal.

4.2 De la legitimación en la causa por pasiva

Las demandadas ECOPETROL S.A. y TRANSPORTES JOALCO S.A. presentan en sus escritos de contestación de la demanda, la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva.

Así las cosas, se tiene que ECOPETROL S.A. sociedad de economía mixta del orden nacional vinculada al Ministerio de Minas y Energía, goza de legitimación en la causa por pasiva, atendiendo a que se reclama por los daños que ocasionaron los tubos de su propiedad cuando eran transportados por la empresa TRANSPORTES JOALCO S.A. y se desprendieron del remolque del camión de placas SUB-011 causando entre otros, la muerte de la señora Carolina Latorre Álvarez.

A su vez, la sociedad TRANSPORTES JOALCO S.A. también está legitimada por cuanto era la encargada en virtud de la suscripción del contrato MA0009632 de transportar los tubos de propiedad de ECOPETROL S.A.

Finalmente, estas empresas, además de fungir como contratante y contratista dentro del contrato de transporte de mercancía - *Contrato MA0009632* - fueron debidamente notificadas de la demanda de la referencia y en general participaron activamente en todas las instancias procesales, de modo que se encuentran legitimadas por pasiva en el proceso.

Por tanto, se declarará no probada la excepción propuesta.

C. Hechos probados.

– En fin de tener una mayor claridad del proceso, se hará una síntesis de los hechos en que se funda y que fueron debidamente probados:

El 30 de mayo del 2012 siendo aproximadamente las 4.35 p.m., la señora Carolina Latorre Álvarez conducía su motocicleta a la altura del kilómetro C+800 mts de la vía que del Municipio de San Gil conduce hacia Bucaramanga, cuando fue impactada por uno de los tubos que se desprendieron del remolque del tracto camión de placas SUB-011 al volcarse sobre la calzada. El choque produjo, además, que el velocípedo se incendiara y la señora Carolina falleciera luego de ser trasladada al hospital. De ello dan cuenta entre otros, los documentos que hacen parte de la investigación que adelantó la Fiscalía 1 seccional del municipio de San Gil sobre el accidente en mención (Fol. 1024-1252 del cuaderno 4); en especial, el informe de la noticia criminal, la inspección técnica realizada al cuerpo de la señora Carolina Latorre Álvarez, así como la copia de la necropsia en la que se concluyó como causa de la muerte: trauma cerrado de torax severo + hemotorax masivo derecho + hemopericardio + taponamiento cardíaco y como manera de la muerte: violenta en accidente de tránsito; (Fol. 1154-1158) el registro civil de defunción (Fol. 37-38 y 65-66 cuaderno 1); así como el informe policial del accidente de tránsito (Fol. 58-60, 83-85 cuaderno 1; Fol. 1103-1104 cuaderno 4 y Fol. 2072-2076 cuaderno 6).

Resultó probado que el vehículo tracto camión de placas SUB-011, marca Chevrolet, línea superbrigadier 229, de servicio público, conducido por el señor Jairo Alfonso Jimenes Chitiva, estuvo involucrado en el accidente ocurrido el 30 de mayo de 2012 en el que perdió la vida la señora Carolina Latorre Álvarez, y fue encontrado por las autoridades con su remolque en posición de volcamiento total sobre la calzada, y los tubos de gran dimensión que transportaba, salidos de la carrocería, lo que provocó daños y lesiones en personas y objetos a su alrededor (Fol. 1027 vto y 1103 cuaderno 4).

A su vez, se pudo determinar, que para la época de los hechos el vehículo descrito pertenecía a la señora Marleny Contreras Cortés, tal como se señala en el Registro Único Nacional de Tránsito visible a folios 1141 a 1142 del cuaderno 4 del expediente; no obstante, existía un contrato de compra-venta sobre el vehículo, suscrito entre la señora Marleny Contreras en calidad de vendedora y el señor Julio Ernesto Rincon Martínez en calidad de comprador, quien a su vez, registra como tomador de seguro automotor (Fol. 220-224 cuaderno 1).

Igualmente, se pudo establecer que el vehículo tracto camión de placas SUB-011 estuvo afiliado a la Sociedad de Transportes SARVI LTDA desde el 24 de octubre de 2011 hasta el 17 de julio de 2011, lapso durante el cual no transportó, ni trabajó para dicha sociedad, sino que lo hacía a través de afiliación temporales con otras empresas, tal como certifica el gerente administrativo y financiero de Transportes SARVI LTDA (Fol. 1253-1255 cuaderno 4).

De acuerdo al manifiesto de carga No. 08942910 expedido por la empresa transportadora TRANSPORTES JOALCO S.A. el 12 de mayo de 2012, pudo establecerse que los tubos desprendidos del vehículo de placas SUB-011 cuyo volcamiento provocó daños, entre ellos, la muerte de la señora Carolina Latorre Álvarez, eran de propiedad de la empresa ECOPETROL S.A., quien los envió a través de la empresa transportadora JOALCO S.A., desde la ciudad de Barranquilla hasta la sede de ECOPETROL S.A. en el municipio de Tocanópolis (Fol. 248-249 y 272-273 cuaderno 1; Fol. 1257 cuaderno 4).

A su vez, ECOPETROL S.A. certifica a través de memorial suscrito por su apoderada judicial, dentro del presente trámite, que formalizó contrato de transporte No. MA-0009632 con la empresa TRANSPORTES JOALCO S.A., cuyo objeto fue precisamente la prestación del servicio de transporte y descargue de tubería para el proyecto San Fernando – Monterrey con cargo al programa de evacuación de crudos de la Acep-essencia de

AVANCE 170520140014000
AFRANCADA, DIREC.TA
AFRANC. DESTREPO QUELLAR Y OTROS
ESTREPO S.A. Y OTROS
PART. SEGUROS S.A.

El contrato bajo carta de porte, póliza o conocimiento de embarque, se rige por las normas especiales.

Es importante tener presente que este tipo de contrato es independiente del contrato de vinculación celebrado entre una empresa transportadora y el propietario del vehículo, tal como lo aclaró el H. Consejo de Estado a través de sentencia

Como bien se señala la parte demandada uno es el contrato de vinculación celebrado entre la empresa transportadora y el propietario del vehículo y otro el contrato de transporte de carga que celebra la empresa transportadora y el remitente de los bienes. Como estos contratos son independientes, sin que sea posible que las disposiciones que se adopten en el contenido de uno de ellos afecten el contenido del otro.

Acerca de este tipo de contrato, el Decreto 173 de 2001 señala

Artículo 22. Contrato de vinculación. El contrato de vinculación del equipo, se regirá por las normas del derecho privado, debiendo contener como mínimo las obligaciones, derechos y prohibiciones de cada una de las partes, su término, causas de terminación y preaviso requeridos para ello, así como aquellas circunstancias que permitan ante la existencia de profundos conflictos y los que permitan pactar la solución de conflictos si que supieran las partes. Igualmente, el contenido del contrato deberá contener los pormenores que conformaran los pagos y cobros a que se comprometen las partes y su vigencia. De acuerdo con esta la empresa expedirá al propietario del vehículo un extracto que contenga en forma discriminada exacta los rubros y montos por cada concepto.
Parágrafo. Las empresas de Transporte Público y los propietarios de los vehículos podrán vincular los equipos transitoriamente para la movilización de la carga bajo la responsabilidad de la empresa que expide el manifiesto de carga.

En lo que respecta a la responsabilidad en la entrega de las mercancías, el Código de Comercio prescribe

ARTICULO 1019. ENTREGA DE MERCANCIAS Y RESPONSABILIDAD DEL TRANSPORTADOR. El remitente deberá entregar las mercancías al transportador debidamente embaladas y rotuladas, conforme a las exigencias propias de su naturaleza, so pena de indemnizar los daños que ocurran por falta de idoneidad del embalaje o de la información.

No obstante, el transportador será responsable de los daños ocasionados por el manejo inadecuado de las mercancías y además responderá por los perjuicios provenientes de la falta o deficiencia de embalaje, cuando, a sabiendas de estas circunstancias, se haga cargo de transportarlas, si la naturaleza o condición de la cosa transportada no está afectada por el remitente.

Los defectos de embalaje imputables al remitente no afectan al transportador de las obligaciones contraídas en virtud de otros contratos de transporte, sin perjuicio de la acción de reembolso contra dicho remitente.

Ahora bien, el contrato de transporte suscrito entre ECOPETROL S.A. y TRANSPORTES JOALCO S.A. y cuyo objeto fue "Servicio transporte y descarga de tubería para el proyecto San Fernando - Monterrey, con cargo al programa de evacuación de ciudados de la vicepresidencia transporte de ECOPETROL S.A." se pactó en relación con la responsabilidad de la carga.

"CONTRATO No. MA-0009632"

()

OBLIGACIONES ESPECIALES DE CONTRATISTA

()

10) Asumir la responsabilidad y responder ante ECOPETROL, en caso de presentarse daños o pérdidas de la carga en su poder, desde el momento en que recibe la carga del proveedor, hasta que hace entrega de la misma en el sitio de destino final indicado por

¹ Consejo de Estado, Sala IV de lo Contencioso Administrativo, Expediente No. 25000-03-00000-2013-00010, sentencia del 11 de mayo de 2016, Ponente Dra. Martha Cecilia Sanz Tobón. Rad. No. 1.001.00.000.000.04.002-13.

se rige por los términos de la normatividad vigente en materia de carga en Colombia C. Co

Así es que en cumplimiento de sus obligaciones, la gestoría técnica del contrato en representación de la empresa petrolera, aprobó los vehículos y conductores presentados por TRANSPORTES JOALCO S.A. para la ejecución del servicio contratado, dentro de los que se encontraba el vehículo de placas SUB-011 y el conductor Jairo Alfonso Jiménez Cáriva (Fol. 2029-2031 cuaderno 6)

Conforme el anterior marco fáctico, procede el despacho a pronunciarse de fondo

1. EL DAÑO

Para determinar la responsabilidad del Estado como primera medida debe acreditarse la existencia de un daño en tanto se configura como [] el primer elemento de la responsabilidad, y de no estar presente torna inoficioso el estudio de la misma, por más que exista una falla del servicio []¹⁰ En este caso se encuentra plenamente probado que como consecuencia del accidente acaecido el 30 de mayo del 2012, la señora Carolina Latorre Álvarez falleció sufriendo un trauma cerrado de torax severo + hemotórax masivo derecho + hemopericardio + taponamiento cardiaco estableciéndose la manera de la muerte violenta en accidente de tránsito tal como lo señala la necropsia que se le practicó a su cuerpo (Fol. 1154-1168), el registro civil de defunción (Fol. 37-38 y 65-66 cuaderno 1), así como el informe policial del accidente de tránsito (Fol. 58-60 83-85 cuaderno 1) menoscabos éstos, que generan a su familia perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales

Así las cosas, se deberá establecer si el aludido daño surge como consecuencia de una violación del contenido obligacional determinado en la Constitución Política y la ley por parte de ECOPEPETROL S.A. TRANSPORTES JOALCO S.A. TRANSPORTES SARVI LTDA. MARLENY CONTRERAS CORTES y JULIO ERNESTO RINCÓN MARTÍNEZ

2. LA IMPUTACIÓN

Una vez acreditado el daño deberá determinarse si es producto de falencias en las cuales pudieron incurrir las entidades demandadas

2.1 Del contrato de transporte de carga y el contrato MA-0009632 suscrito entre ECOPEPETROL S.A. y TRANSPORTES JOALCO S.A.

El transporte de carga es una modalidad del servicio público de transporte que se encuentra regulada por el decreto 173 de 2001, en donde se define de la siguiente manera

Artículo 6o. Servicio público de transporte terrestre automotor de carga. Es aquel destinado a satisfacer las necesidades generales de movilización de cosas de un lugar a otro, en vehículos automotores de servicio público a cambio de una remuneración o precio bajo la responsabilidad de una empresa de transporte legalmente constituida y debidamente habilitada en esta modalidad, excepto el servicio de transporte de que trata el Decreto 2044 del 30 de septiembre de 1968.

Los artículos 1008 y siguientes del Código de Comercio regulan específicamente lo atinente al contrato de transporte de carga así

ARTÍCULO 1008. Se tendrá como partes en el contrato de transporte de cosas el transportador y el remitente. Para parte el destinatario, cuando acepte el respectivo contrato.

Por transportador se entenderá la persona que se obliga a recibir, conducir y entregar las cosas objeto del contrato, por remitente la que se obliga por cuenta propia o ajena, a entregar las cosas para la conducción, en las condiciones, lugar y tiempo convenidos, y por destinatario aquella a quien se envían las cosas.

Una misma persona podrá ser a un mismo tiempo remitente y destinatario.

¹⁰ Juan Carlos Henao, La Duda, Análisis Comparativo de la Responsabilidad Extracontractual, en: *Estudios de Derecho Administrativo*, 1ª edición segunda reimpresión, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2007, pág. 39.

ECOPETROL. El CONTRATISTA será el llamado a responder por los daños o pérdidas ocasionados. El CONTRATISTA no será incluido como beneficiario de la póliza de seguros. La vigencia de la póliza ECOPETROL, y por tanto en caso de reclamación por cargo a la póliza de ECOPETROL, ECOPETROL no intermediará en la relación que pueda surgir entre la compañía de seguros correspondiente y el CONTRATISTA, para esta finalidad para acregar a quien ella considere. 12) Sin perjuicio de lo anterior, el CONTRATISTA en el evento de presentarse pérdidas o daños de la carga que tenga en su poder (desde el momento en que recibe la carga hasta que hace entrega de la misma en el sitio de destino final indicado por ECOPETROL) deberá restituir a ECOPETROL los materiales con las mismas especificaciones o en su defecto restituir el valor pagado por ECOPETROL (...). 24) Mantener en buenas condiciones y a satisfacción de ECOPETROL todo equipo contratado para la prestación de los servicios, para lo cual ECOPETROL podrá exigir antes de iniciar y durante el transcurso de las operaciones pruebas de equipos (...). 25) Mantener correctamente los materiales requeridos para la ejecución de los servicios, realizando los labores de cargue, descargue y/o transporte de los mismos, manteniendo permanentemente un balance de los materiales. En desarrollo de esta actividad el CONTRATISTA deberá observar todas las normas de transporte terrestre aplicables y las reglas de seguridad industrial (...). 27) Suministrar los vehículos con todos los accesorios y herramientas que se requieran para la debida prestación del servicio. (Fol. 46) Cuaderno 2)

Es así que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1013 del Código de Comercio, normatividad aplicable al contrato suscrito entre ECOPETROL S.A. y TRANSPORTES JOALCO S.A., el remitente tiene la obligación de entregar las mercancías al transportador debidamente embaladas y rotuladas conforme a las exigencias propias de su naturaleza, so pena de indemnizar los daños que ocurran por deficiencia del embalaje o de la información.

A su vez el transportador, o empresa de transportes, será responsable de los daños ocasionados por el manejo inadecuado de las mercancías y además, responderá por los perjuicios provenientes de la falta o deficiencia de embalaje, cuando a sabiendas de estas circunstancias, se haga cargo de transportarlas.

De este modo, dicha situación también se encuentra prevista en el contrato MA-0005632 suscrito entre ECOPETROL S.A. y TRANSPORTES JOALCO S.A., tal como se desprende de las cláusulas transcritas, en el entendido, que el contratista se obliga en relación con la carga designada – tubería – a asumir la responsabilidad y responder ante ECOPETROL, en caso de presentarse daños o pérdidas de la carga en su poder, desde el momento en que recibe la carga del proveedor, hasta que hace entrega de la misma en el sitio de destino final indicado por ECOPETROL, igualmente, a realizar las labores de cargue, descargue y/o transporte del equipo contratado, manteniendo permanentemente un balance de los materiales, comprometiéndose para ello, a observar todas las normas de transporte terrestre aplicables y las reglas de seguridad industrial.

Es así que, en desarrollo del contrato en mención, se observa a fojas 1240 del cuaderno 4 y 2042 de cuaderno 6 del expediente, el reporte de aseguramiento de la calidad en inspección de la tubería a transportar, efectuada el 28 de mayo de 2012 en la Sociedad Portuaria Regional Barranquilla, por un inspector adscrito a la empresa National Oilwell Varco. Allí se observa, la entrega de seis tubos en línea, de acero al carbono con un diámetro de 30", que fueron sujetados con 4 maderos 4"x4"x2,50 mts y 4 maderos 6"x6"x2,50 mts y cuya entrega para revisión fue hecha por el conductor del vehículo de placas SUB-011 que se disponía a transportarla. Es decir, que para ese momento la carga ya había sido recibida por la empresa transportadora JOALCO S.A., pues además, la remesa tiene fecha del 12 de mayo de 2012. (Fol. 2040 cuaderno 6).

También se observa que el conductor del vehículo de placas SUB-011, asistió a la capacitación de normas para el transporte de tuberías, dictada el 28 de mayo de 2012 (Fol. 1243 cuaderno 4), y que igualmente, de acuerdo a la normatividad "Por la cual se adoptan los límites de pesos y dimensiones en los vehículos de transporte terrestre, automotor de carga por carretera, para su operación normal en la red vial nacional", Resolución 004100 de 2004, modificada en su artículo 8º por la Resolución 1732 de 2009, vehículo cumplía con los límites establecidos, como a continuación se observa:

"Artículo 1º. Modificar el artículo 8º de la Resolución 4100 de 2004, de la siguiente manera:

El vehículo de placas SUB-011 se encuentra clasificado dentro de la designación 252, por lo tanto su capacidad de peso es de 32.000 tal como se observa en la licencia de transporte de a folio 1139 del cuaderno 4. El peso de la carga de acuerdo a la remesa del 12 de mayo de 2012 fue de 27.000 kilogramos (Fol. 2040 cuaderno 6), lo que no rebasa la capacidad del automotor.

DESIGNACION	DESERVACION kg	MAXIMO kg	FBV TOLERANCIA POSITIVA DE MEDICION kg
251	28.000	27.000	675
252	32.000	32.000	800
253	40.000	40.000	1.013
351	29.000	29.000	775
352	40.000	40.000	1.013
353	50.000	50.000	1.300

El vehículo de placas SUB-011 se encuentra clasificado dentro de la designación 252, por lo tanto su capacidad de peso es de 32.000 tal como se observa en la licencia de transporte de a folio 1139 del cuaderno 4. El peso de la carga de acuerdo a la remesa del 12 de mayo de 2012 fue de 27.000 kilogramos (Fol. 2040 cuaderno 6), lo que no rebasa la capacidad del automotor.

La longitud de carga del vehículo según la tarjeta de propiedad del tráiler, es de 12,31 metros, la de la carga (tubos) es de 12 metros, de acuerdo a la remesa del 12 de mayo de 2012, por lo que en longitud también se adecuó a la capacidad del vehículo transportador (Fol. 1140 cuaderno 4 y Fol. 2040 cuaderno 6).

Ello explica que la gestión técnica y administrativa de ECOPETROL aprobara entre otros el vehículo de placas SUB-011 y a su conductor, para efectuar la entrega de los tubos ya descritos, tal como asegura la apoderada de la compañía en respuesta enviada al despacho el 31 de mayo de 2018 (Fol. 2029-2031 cuaderno 6).

Además en relación con la gestión mencionada, considera el Despacho que su función llegaba hasta la aprobación del vehículo de placas SUB-011 y de su conductor, para el desarrollo de dicho contrato, sin que bajo su control estuviera el correcto y efectivo transporte de la carga como tal, en el entendido que sus funciones estaban dirigidas a velar por el desarrollo, ejecución y cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades suscritas por las partes en dicho instrumento, dentro de las que estaba el transporte y adecuado manejo de las mercancías por parte de la empresa transportadora, tal como se desprende de la normatividad antes transcrita y del contrato MA-0009632 suscrito entre las partes.

Es así, que en la cláusula vigésima del contrato No. MA-0009632 se pactó la administración y gestión del mismo a cargo de ECOPETROL S.A., determinándose especialmente, que esta función está dispuesta para lo siguiente (Fol. 481 cuaderno 2):

“ECOPETROL mantendrá por su cuenta, durante toda la vigencia del Contrato, el personal (propio o contratado) que adelantará las funciones de Administración y Gestión de Contratos (o Interventoría) que sea necesario para asegurar el desarrollo, la ejecución y el cumplimiento de las responsabilidades, compromisos y obligaciones pactadas”

Es importante resaltar, que el vehículo de placas SUB-011 fue inspeccionado por parte de TRANSPORTES JOCALCO S.A., el 28 de mayo de 2012, incluyéndose la información relativa a su documentación, cabezota exterior, mecánica, equipamiento, llantas, tanque, tubería y plancha o grillo, sin que se hayan consignado observaciones o salvedad alguna frente a su funcionamiento, por lo que se entiende que su funcionamiento y estado fue aprobado por la empresa transportadora dos días antes del accidente que desencadenó los hechos cuya responsabilidad aquí se debate. (Fol. 1236-1239 cuaderno 4)

En el informe policial del accidente de tránsito ocurrido el 30 de mayo de 2012 y que en la atención del despacho se advierte, que la autoridad encargada de realizar el informe fue el agente Duvan Ramsey Carreño Rueda, quien además absolvió testimonio en el trámite probatorio el pasado 5 de marzo de 2019 (Fol. 2126 cuaderno 6). En dicho informe se observa que consignó como posible causa del accidente el exceso de velocidad, tesis que explico en la audiencia de pruebas, partiendo de dos razones: 1) que el lugar donde ocurrió el accidente es una zona residencial que pertenece al Municipio Urbano del Municipio de San Gil, y 2) Porque en el bosquejo topográfico no se observa huella de frenado, pero sí hay una huella de arrastre de 25 metros de largo, producida por la fricción entre la parte metálica del vehículo con el asfalto. Ello indica, que el vehículo no transitaba a menos de 30 kilómetros por hora, pues en caso contrario, el conductor habría alcanzado a controlar el automotor. Además - continúa explicando - para que se haya producido el volcamiento lateral y los tubos se hayan salidos desde ese punto, es porque hubo exceso de velocidad, esto es, superior a los 30 km/h que es la reglamentaria para el sector residencial. Indica que pese a que no se pudo practicar la prueba técnica establecida determinar la velocidad que llevaba el automotor, por cuanto no se tiene conocimiento del coeficiente de rozamiento, no obstante, por ser un sector residencial, cuya velocidad máxima es de 30 km/h y por la huella de arrastre que dejó el vehículo, se puede determinar que iba sobrepasando dicha velocidad. (min. 00:18:49 a 00:59:34).

En concordancia con lo anterior, encuentra el Despacho que dentro del reporte completo de seguimiento satelital con posicionamiento y velocidad del vehículo de placas SUB-011 durante el recorrido que hizo con la carga de propiedad de la compañía demandada ECOPEPETROL S.A., se puede establecer, que partió de la ciudad de Barranquilla el 28 de mayo de 2012 y que minutos antes del volcamiento, presentaba una velocidad de 38 km/h. (Fol. 1246-1249, cuaderno 4).

Ahora bien, dentro del informe fotográfico del lugar de los hechos, realizado por la SIJIN, se expuso frente al tráiler del tracto camión de placas SUB-011, que las cinchas de amarre que tenía la carga fueron avenadas en el momento del accidente, cuando la tubería las rompió. Además se consignó, que la etiqueta de las mismas, describe la capacidad de resistencia, de 6000 a 13600 kgs, recuérdese que el peso de la carga se determinó en el certificado de remesa en 27 000 kg, no obstante, en el registro fotográfico que acompaña el reporte de aseguramiento de la calidad en inspección de la tubería, se pueden observar al menos 4 de estas cinchas. (Fol. 1109 y 1241-1242, cuaderno 4).

Este análisis legal y probatorio permite establecer al despacho, lo siguiente:

- Que, en relación con el remitente, su obligación se oñe a entregar las mercancías al transportador debidamente embaladas y rotuladas conforme a las exigencias propias de su naturaleza. Para el caso particular se tiene que dicha obligación fue cumplida por ECOPEPETROL S.A., en el entendido, que previo al inicio del traslado de la tubería, ésta fue inspeccionada por la compañía National Oilwell Varco, quien certifica que el 28 de mayo de 2012 recibió seis tubos de acero al carbón, que fueron sujetados con 4 maderos 4"x4"x2 50 mts y 4 maderos 6"x6"x2 50 mts y cuya entrega para revisión fue hecha por el conductor del vehículo de placas SUB-011 que se disponía a transportarla. Es decir, que para ese momento la carga ya había sido recibida por la empresa transportadora JOALCO S.A., pues, además, la remesa tiene fecha del 12 de mayo de 2012. No encuentra el Despacho que se hayan hecho observaciones o aclaración alguna frente al embalaje de los tubos a transportar, por lo que entiende el despacho que frente a la entrega y embalaje de la mercancía, ECOPEPETROL S.A. cumplió con su obligación. (Fol. 2040 cuaderno 6).
- Que el vehículo de placas SUB-011 cumplía para la época de los hechos, con los límites de peso y longitud para el transporte terrestre automotor de carga por carretera, y que los tubos estaban dentro del rango de peso y longitud prescrito por la Resolución 004100 de 2004, modificada en su artículo 8º por la Resolución 1782 de 2009.
- Que dicho vehículo fue inspeccionado y aprobado por la empresa contratista TRANSPORTES JOALCO S.A., el 28 de mayo de 2012, esto es, dos días antes del accidente.

En consecuencia, dentro de las obligaciones de la empresa transportadora TRANSPORTES JOALCO S.A. están las de responder por los daños ocasionados por el incumplimiento de las mercancías y además por los perjuicios provenientes de la falta de empaque cuando a sabiendas de estas circunstancias se haya transportado las. A su vez, se comprometió a en relación con la carga designada asumir la responsabilidad y responder ante ECOPEPETROL, en caso de perdida o daños de la carga en su poder desde el momento en que recibe la carga del proveedor hasta que hace entrega de la misma en el sitio de destino final de acuerdo a ECOPEPETROL igualmente a realizar las labores de carque, descargue y/o transporte del equipo contratado manteniendo permanentemente un balance de los daños comprometiéndose para ello, a observar todas las normas de transporte terrestre aplicables y las reglas de seguridad industrial. También frente a la ocurrencia de daños a terceros se comprometió

CLÁUSULA DECIMA SEXTA - DAÑOS A PERSONAS EQUIPO, DATOS Y PROGRAMAS

El CONTRATISTA se obliga a responder y a asumir los costos de la reparación de los daños ocasionados a personas y/o bienes de particulares, de servicio público o de ECOPEPETROL, por imprudencia, negligencia impericia o descuido por la no observancia de las políticas, normas o procedimientos establecidos dentro o fuera de las áreas donde se ha de ejecutar total o parcialmente el objeto del contrato derivadas de su actividad, de la de sus trabajadores, de la de sus proveedores o de la de sus subcontratistas (Fol. 475 cuaderno 2)

Que si bien, no quedó plenamente declarada la causa del accidente de tránsito ocurrida el 30 de mayo de 2012 en el que estuvo involucrado el vehículo de placas SUB-011 y que ocasionó la muerte de la señora CAROLINA LATORRE ÁLVAREZ, si existen pruebas que permiten establecer que no fue debido a la carga -tubos- que transportaba el mismo, pues desde el mismo informe policial, el cual fue ampliado en audiencia de pruebas celebrada dentro del trámite de la referencia, se consignó el exceso de velocidad como la causa más probable del accidente. A su vez, en el reporte fotográfico del lugar de los hechos, realizado por la SIJIN, se expuso frente al trailer del tracto camión, que las cinchas de amarre que tenía la carga fueron averiadas en el momento del accidente cuando la tubería las rompe. Además, se indicó que la capacidad de resistencia de las cinchas es de 6000 a 13000 kgs. en ese orden, si bien el peso de los tubos era de 27.000 kg. no obstante, en el registro fotográfico que acompaña el reporte de aseguramiento de la calidad en inspección de la tubería, se pueden observar al menos 4 de estas cinchas. (Fol. 1109 y 1241-1242 cuaderno 4)

Igualmente, dentro del reporte completo de seguimiento satelital con posicionamiento y velocidad del vehículo de placas SUB-011 durante el recorrido que hizo con la carga de propiedad de la compañía demandada ECOPEPETROL S.A. se puede establecer, que salió de la ciudad de Barranquilla el 28 de mayo de 2012 y que minutos antes del volcamiento, presentaba una velocidad de 38 km/h. (Fol. 1246-1249 cuaderno 4)

Así las cosas, para el Despacho es claro, de acuerdo a las disposiciones legales, así como a las obligaciones contractuales pactadas entre ECOPEPETROL S.A. y TRANSPORTES JOALCO S.A. en concordancia con los hechos que quedaron debidamente probados en el plenario, que no le asiste responsabilidad a la compañía ECOPEPETROL S.A. por el accidente ocurrido el 30 de mayo de 2012 en la avenida Ragonessi kilómetro 0+800 del municipio de San Gil, en el que estuvo involucrado el vehículo de placas SUB-011 y que ocasionó la muerte de la señora CAROLINA LATORRE ALVAREZ, cuando de su remolque de carga se desprendieron los tubos que transportaba en cumplimiento del contrato No. MA-0009632 suscrito entre dichas empresas.

Ahora bien, en lo que respecta a la responsabilidad que se endilga a la empresa transportadora SARVI LTDA y a los señores MARLENY CONTRERAS CORTES y JULIO ERNESTO RINCON MARTÍNEZ, en calidad de propietarios del vehículo de placas SUB-011, se hace necesario recordar, que de acuerdo a lo establecido en los artículos 1008 y 1013 del C.Co., transcritos anteriormente, las partes del contrato de transporte de cosas

destinatario cuando acepte el respectivo **manifiesto de carga** de las empresas TRANSPORTES JOALCO S.A. y ECOPEPETROL S.A.

Este tipo de contrato de transporte es independiente del contrato de vinculación celebrado entre el propietario del vehículo y el propietario del vehículo, el cual está regulado por el artículo 10 de la Ley 336 de 1956, y debe contener como mínimo las obligaciones, derechos y condiciones de cada uno de las partes, su término, causales de terminación y preaviso de rescisión, así como aquellas condiciones especiales que permitan definir la responsabilidad de las partes y los mecanismos alternativos de solución de conflictos que se acuerden las partes. Por lo tanto, este instrumento no puede suplirse con el manifiesto de carga como recientemente lo ha precisado el H. Consejo de Estado.¹²

En consecuencia, además, que en casos como el que nos ocupa, la responsabilidad recae únicamente en la empresa transportadora, pues es la que cuenta con autorización legal para ejercer la actividad de transporte de cosas u objetos y así lo ha dicho el H. Consejo de Estado:

El punto es que la autorización o autorización que se otorga al operador, o sea, a la empresa transportadora, amparada en la Ley 336 de 1956, y de que se trata que la actividad de transportar se desarrolle por persona diferente a la llamada "toma perfecta" concuerda con las previsiones del Código de Comercio en el sentido de que el contrato de transporte debe ser celebrado con transportadores autorizados y que aun en el caso de que el contratante sigue siendo el transportador autorizado, pues el cargo es dado bajo su responsabilidad, con lo cual se evidencia, además, que no es posible a la empresa transportadora actuar como intermediaria entre el usuario y quien hace la conducción por contrato nulo, pues es la llamada para prestar el servicio público de transporte y así mismo, no puede desarrollarse acto alguno que implique que la actividad se desarrolle por persona diferente, pues jurídicamente sigue respondiendo como parte en el contrato de transporte.

En ese orden de ideas, para el despacho no existe duda que la responsabilidad por los hechos ocurridos el 30 de mayo de 2012, en los que lamentablemente perdió la vida la señora CAROLINA LATORRE ALVAREZ, cuando del remolque de carga del vehículo de placas SUB-011 se desprendieron los tubos que transportaba, chocando accidentalmente con la motocicleta en que se transportaba, es de la empresa TRANSPORTES JOALCO S.A. sin que interese que en desarrollo del contrato de transporte de carga haya suscrito contratos de vinculación con otras empresas o propietarios de vehículos como ya se explicó. En consecuencia, TRANSPORTES JOALCO S.A. es quien debe responder por los daños materiales e inmateriales que resulten probados.

Ahora bien, la empresa transportadora sujeto de condena, llamo en garantía dentro del trámite del presente proceso a la empresa LIBERTY SEGUROS S.A. por lo tanto, pasara a estudiarse lo que corresponda al respecto.

3. Llamamiento en garantía

A través de auto del 13 de abril de 2015 este Despacho admitió el llamamiento en garantía que realizar la demandada TRANSPORTES JOALCO S.A. a la empresa LIBERTY SEGUROS S.A., ordenando su notificación y concediéndole un término de quince (15) días para contestar la demanda (Fol. 496-496).

De los documentos allegados con el escrito de llamamiento, puede acreditarse el vínculo contractual entre LIBERTY SEGUROS S.A. y TRANSPORTES JOALCO S.A. respaldado

¹² Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 19 de octubre de 2012, Consecutor Ponente Dr. Oswaldo Giraldo López Rod. No. 11001-33-24-0001-2011, Q1159-01, [1] manifiesto de carga, conforme a lo prevé el presente Decreto 173 de 2003, que se empuja, es, el documento que ampara el transporte de mercancías ante las distintas autoridades, por lo tanto, debe ser portado por el conductor de la unidad durante todo el recorrido. Se utilizara para llevar las estadísticas del transporte por medio de carga por carretera dentro de la unidad, a la vez, el conductor debe tener en cuenta el contrato de transporte y es allí para detallar las mercancías que se transportan, pero de ninguna manera puede entenderse que dicho documento reemplaza al contrato de vinculación, que como se dijo, se forma y actúa de manera para regular las relaciones entre el propietario del vehículo y la empresa de transporte durante aquel tiempo que parte del por una autorización registrada por la empresa respectiva.

¹³ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Sentencia de 20 de junio de 2014, Consecutor Ponente Dr. Diego Gómez Lopera Rod. No. 9779.

EX - 43350020140010200
RECLAMACIÓN DIRECTA
HENRY RESTREPO CUELLAR Y OTROS
C/O FILITROL S.A. Y OTROS
LIBERTY SEGUROS S.A.

del contrato de seguros de Responsabilidad Civil Extracontractual, que obra en la póliza N° 408349 expedida el 23 de abril de 2012 por un valor asegurado de \$393.198.031,20, cuyo cubrimiento es desde el 19 de abril del 2012 hasta el 04 de octubre del 2012 (Fol. 437 cuaderno 2).

En consecuencia, se encuentra acreditado el vínculo contractual del llamado en garantía con la empresa TRANSPORTES JUALCO S.A. que cuenta con vigencia al momento en que se produjo el accidente del 30 de mayo del 2012, motivo por el cual, el despacho considera que debe hacerse efectiva la póliza N° 408349 citada en el presente asunto por el valor del valor asegurado, a saber: \$393.198.031,20.

En consecuencia, LIBERTY SEGUROS S.A. pagará a los demandantes legitimados, esto es, a LAURA SOFÍA RESTREPO LATORRE y MARYI DANIELA RESTREPO LATORRE las proporciones que se reconozcan y hasta el límite del valor asegurado, al cual debe restarse el deducible pactado. Bajo ese orden de ideas, la empresa - TRANSPORTES JUALCO S.A. - pagará la diferencia entre lo efectivamente cancelado por el llamado y la suma impuesta.

4. Liquidación de perjuicios

La solicitante, en la demanda a favor de las demandantes legitimadas materialmente en la presente causa, Maryi Daniela Restrepo Latorre y Laura Sofía Restrepo Latorre los siguientes:

Perjuicios inmatenales

- Indemnización por perjuicios morales en la cantidad de cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada una de las niñas Maryi Daniela Restrepo Latorre y Laura Sofía Restrepo Latorre.
- A título de daño a la vida de relación, la cantidad de cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada una de las niñas Maryi Daniela Restrepo Latorre y Laura Sofía Restrepo Latorre.

Perjuicios materiales

- En la modalidad de lucro cesante, la suma que resulte para cada una de las señoras Maryi Daniela Restrepo Latorre y Laura Sofía Restrepo Latorre, partiendo de la suma de \$1.500.000 que es el salario que devengaba la señora Carolina Latorre Álvarez en la empresa Pesquera del Mar donde laboraba al momento de los hechos.

Reconocimiento y cuantificación de los perjuicios morales

La sección tercera del Consejo de Estado, mediante la sentencia del 28 de agosto de 2014, como el documento final aprobado en el acta de la misma fecha, que fijó los referentes a la reparación de perjuicios inmatenales, recogió la línea jurisprudencial, estableciendo unos parámetros unificados para tasar este perjuicio en casos de muerte, lesiones personales y privación de la libertad, disponiendo en caso de muerte lo siguiente:

2. PERJUICIO MORAL. El concepto se encuentra compuesto por el dolor, la aflicción y en general los sentimientos de desesperación, angustia, desconsuelo, tristeza, etc., que invaden a la víctima directa o indirecta de un daño antijurídico individual o colectivo.

2.1 REPARACIÓN DEL DAÑO MORAL EN CASO DE MUERTE

Para la reparación del daño moral, en caso de muerte, se han distinguido cinco niveles de cercanía afectiva entre la víctima directa y aquellos que acuden a la justicia en calidad de perjudicados o víctimas indirectas:

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Consejo de Estado
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santafé

Signa 03 de 14

Nivel No. 1. Comprende la relación afectiva propia de las relaciones conyugales (pareja de hecho o, en general, de los miembros de un mismo núcleo familiar (pareja de consanguinidad, cónyuges o compañeros permanentes o estables). A este nivel corresponde el tope indemnizatorio (100 salmín).

Nivel No. 2. Donde se ubica la relación afectiva propia del segundo grado de consanguinidad o civil (abuelos, hermanos y nietos). A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 50% del tope indemnizatorio.

Nivel No. 3. Está comprendido por la relación afectiva propia del tercer grado de consanguinidad o civil. A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 35% del tope indemnizatorio.

Nivel No. 4. Aquí se ubica la relación afectiva propia del cuarto grado de consanguinidad o civil. A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 25% del tope indemnizatorio.

Nivel No. 5. Comprende las relaciones afectivas no familiares (terceros intervinientes). A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 15% del tope indemnizatorio.

La siguiente tabla recoge lo expuesto:

REPARACIÓN DEL DAÑO MORAL EN CASO DE MUERTE					
REGLA GENERAL					
	NIVEL 1	NIVEL 2	NIVEL 3	NIVEL 4	NIVEL 5
	Relaciones afectivas conyugales y estables (pareja de hecho)	Relación afectiva de 2º de consanguinidad o civil (abuelos, hermanos y nietos)	Relación afectiva de 3º de consanguinidad o civil	Relación afectiva de 4º de consanguinidad o civil	Relaciones afectivas no familiares (terceros intervinientes)
Porcentaje	100%	50%	35%	25%	15%
Equivalencia en salarios mínimos	100	50	35	25	15

Para los niveles 1 y 2 se requiere la prueba del estado civil o de la pareja de hecho o compañeros permanentes. Para los niveles 3 y 4, además, se requiere la prueba de la relación afectiva. Para el nivel 5 deberá ser probada la relación afectiva. (Destaca el desdén)

De conformidad con la tabla antes presentada, corresponde el reconocimiento de los perjuicios morales a las demandantes legitimadas así:

Nombre	Calidad en la que comparece	Salarios mínimos mensuales legales vigentes
Maryi Daniela Restrepo Latorre	Hija	100
Laura Sofía Restrepo Latorre	Hija	100

Las anteriores sumas se cancelaran por parte de la SOCIEDAD TRANSPORTES JOALCO S.A., en salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de ejecutoria de la sentencia.

4.2 Del perjuicio a la vida de relación solicitado por la parte demandante

El ingreso base de liquidación es la cantidad de dinero que percibía la señora Carolina Latorre antes de su fallecimiento. Para la liquidación del perjuicio se tomará como base de liquidación el salario mínimo legal mensual vigente para el momento en que ocurrió el hecho, es decir, el 30 de mayo de 2012, a saber, \$566.700 oo. que será actualizado así:

$$\text{Renta Base} = \frac{\text{Renta Final} \times 100}{\text{Renta Inicial}}$$

Entonces:

Renta actualizada a establecer
Renta histórica: \$535.600 oo.
Índice de precios al consumidor, certificado por el DANE, del mes anterior a esta sentencia, es decir, enero del 2020
Índice de precios al consumidor, certificado por el DANE del mes de la ocurrencia del fallecimiento, es decir, mayo del 2012.

$$\begin{aligned} \text{Renta Base} &= 143.2668 \\ &= 104.24000 \\ &= 143.2668 \end{aligned}$$

Como la anterior es inferior al salario mínimo legal mensual vigente para el año 2020, y en esta consideración que conforme al ordenamiento legal, se presume que ninguna persona perciba menos de un salario mínimo mensual, será tomada como el valor de la renta actualizada \$877.803 oo. que corresponde al salario mínimo de la presente anualidad. A lo anterior se le sumará el 25% de prestaciones sociales y de otra parte, se le deducirá el 15% correspondiente al valor aproximado que la víctima directa del daño destinaria para su propio sostenimiento; así, luego de efectuar las aludidas operaciones, el ingreso base de liquidación es de \$822.940 oo.

Entre las hijas son dos las demandantes que recibirán el pago de este perjuicio, por lo que se repartirá designándose un 50% para Maryi Daniela Restrepo Latorre y el otro 50% para Laura Sofía Restrepo Latorre, hijas de la víctima.

Para determinar el monto de la indemnización del perjuicio material a título de lucro cesante se debe tener en cuenta, que como consta a folio 46 del expediente, la señora CAROLINA LATORRE ALVAREZ, nació el 10 de septiembre de 1979, razón por la cual para el 30 de mayo de 2012, fecha de su muerte (Fol. 37), tenía 32 años y su expectativa de vida era de 33.4 años, es decir 840.8 meses.

No obstante, atendiendo al hecho que para el momento del fallecimiento de la víctima directa, señora CAROLINA LATORRE ALVAREZ, sus hijas eran menores de edad, se entiende que el sustento económico que les prodigaba se extendería hasta los 25 años de edad de cada una de ellas, pues, ante la ausencia de prueba en contrario, se puede inferir de acuerdo a las reglas de la experiencia que es en esta etapa de la vida que los colombianos han formado su propio hogar.

Así las cosas se procederá con la liquidación:

- Para la menor MARYI DANIELA RESTREPO LATORRE (hija)

LUCRO CESANTE CONSOLIDADO: Ingreso Base de Liquidación (IBL): \$411.470 que resulta de sacar el 50% de \$822.940 oo. TIEMPO CONSOLIDADO: Desde la fecha del hecho (30 de mayo de 2012) hasta la fecha de esta sentencia (17 de febrero de 2020), esto es 93.6 meses, aplicando la siguiente fórmula:

Así, las cosas, observa el desdóculo que la parte demandante no pudo probar a dicho perjuicio en las pretenciones de la demanda, sin embargo, no puede ignorarse a dicha sobre el particular en los hechos o los fundamentos de derecho, ni esta una prueba que puede acreditar el mismo, razón por la cual, los perjuicios solicitados bajo esta categoría no serán reconocidos, dado que los demandantes no cumplieron con la carga de la prueba. Téngase en cuenta, que si bien el accidente y posterior muerte de la señora Carolina Latorre Álvarez produjo dolor, aflicción, angustia y un cambio en la dinámica de su familia, este daño es abarcado por los perjuicios morales.

La indemnización de perjuicios materiales está sometida a las pruebas que de ellos se encuentren en el expediente, salvo las excepciones jurisprudenciales dando aplicación al principio de reparación integral.

4 3 1 Lucro cesante

Sin embargo, de los testimonios rendidos dentro del proceso en la referenda, así como los recolectados dentro del proceso de custodia y cuidado personal de las menores Mayi Daniela Restrepo Latorre y Laura Sofía Restrepo Latorre (Fol. 1734-1737 cuaderno 5) así como el hecho 4.11 de la demanda, (Fol. 13 C-1) se infiere que al momento del fallecimiento la señora CAROLINA LATORRE ÁLVAREZ se encontraba laborando y se encargaba del sostenimiento de sus hijas con quienes vivía en el municipio de San Gil.

Il C.C. ha potere di legge cosàto ad la seguente m. d. l.:

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

LUCRO CESANTE FUTURO Para la liquidación de la indemnización futura o anticipada que corresponde al período comprendido entre la vigencia de la fecha de esta sentencia y la fecha en que LAURA SOFIA RESTREPO LATORRE cumpla los 25 años - (2027) - teniendo en cuenta que para la fecha de esta providencia tiene 17 años, 11 meses y 15 días, toda vez que nació el 03 de marzo de 2002 (fol. 39 cuaderno 1) de manera que el período a indemnizar corresponde a los que representan 84.56 meses.

$$S = Ra \frac{(1 + i)^n - 1}{i}$$

$$S = \$ 411.470 \frac{(1 + 0.004867)^{84.56} - 1}{0.004867}$$

Total perjuicios materiales. SESENTA Y OCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL CINCO PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS (\$68.101.065.25)

- Para la menor LAURA SOFIA RESTREPO LATORRE (Iija).

LUCRO CESANTE CONSOLIDADO. Ingreso Base de Liquidación (IBL) \$411.470 que resulta de sacar el 50% de \$822.940.00. TIEMPO CONSOLIDADO. Desde la fecha del hecho (30 de mayo de 2012) hasta la fecha de esta sentencia (17 de febrero de 2020), esto es 93.8 meses, aplicando la siguiente fórmula:

$$S = Ra \frac{(1 + i)^n - 1}{i}$$

$$S = \$ 411.470 \frac{(1 + 0.004867)^{93.8} - 1}{0.004867}$$

$$S = \$ 48.337.558,14$$

LUCRO CESANTE FUTURO. Para la liquidación de la indemnización futura o anticipada que corresponde al período comprendido entre el día siguiente de la fecha de esta sentencia y la fecha en que LAURA SOFIA RESTREPO LATORRE cumpla los 25 años - (2027) - teniendo en cuenta que para la fecha de esta providencia tiene 17 años, 11 meses y 15 días, toda vez que nació el 03 de marzo de 2002 (fol. 39 cuaderno 1) de manera que el período a indemnizar corresponde a los que representan 84.56 meses.

$$S = Ra \frac{(1 + i)^n - 1}{i}$$

$$S = \$ 411.470 \frac{(1 + 0.004867)^{84.56} - 1}{0.004867 (1 + 0.004867)^{93.8}}$$

$$S = \$ 28.467.107.19$$

Total perjuicios materiales. SETENTA Y SIETE MILLONES CIENTO CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS (\$77.104.665.33)

Condena en costas

De conformidad con el artículo 188 del C P A C A y 365 del Código General del Proceso, se condenará en costas a la parte demandada TRANSPORTES JOALCO S.A., por haber resultado vencida en el presente proceso, valor que deberá liquidarse de conformidad con el artículo 366 del C G del P.

En mérito de lo anteriormente expuesto, el JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE SAN GIL, Santander, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley

FALLA

- Primero. DECLARAR la falta de legitimación en la causa por activa de los señores HENRY RESTREPO CUELLAR, LUCRECIA CUELLAR FIERRO, CARLOS ALFREDO LOSADA CUELLAR y CLAUDIA JIMENA RESTREPO CUELLAR para actuar en el presente asunto de conformidad con las razones expuestas.
- Segundo. DECLARAR no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva presentada por ECOPETROL S.A. Y la sociedad TRANSPORTES JOALCO S.A. para actuar en el presente asunto de conformidad con las razones expuestas.
- Tercero. DECLARAR administrativamente y patrimonialmente responsable a la sociedad TRANSPORTES JOALCO S.A. por los perjuicios ocasionados a la p. actora con el daño consistente en la muerte de la señora CAROLINA LATORRE ALVAREZ de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia.
- Cuarto. CONDENAR a la sociedad TRANSPORTES JOALCO S.A. a pagar a la p. actora la indemnización por concepto de perjuicios, correspondiente a las siguientes sumas de dinero:

2.1 Perjuicios Morales de la siguiente manera:

- 2.1.1 MARYI DANIELA RESTREPO LATORRE, madre de la víctima el equivalente en pesos 100 S.M.L.M.V.
- 2.1.2 LAURA SOFIA RESTREPO LATORRE, en calidad de hija de la víctima, el equivalente en pesos 100 S.M.L.M.V.

Total de los perjuicios por daño moral: doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes equivalentes a ciento setenta y cinco millones quinientos sesenta mil seiscientos pesos M/CTE (\$175.660.600 co).

2.2 Perjuicios Materiales: Lucro cesante consolidado y futuro

- 2.2.1 A favor de MARYI DANIELA RESTREPO LATORRE, SESENTA Y OCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL SESENTA Y CINCO PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS (\$68.167.065.25).
- 2.2.2 A favor de LAURA SOFIA RESTREPO LATORRE, SETENTA Y SIETE MILLONES CIENTO CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS (\$77.104.665.33).

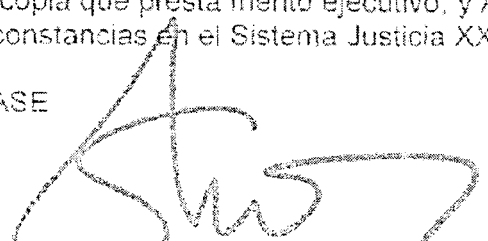
- Quinto. HACER efectiva la póliza N° 408349 expedida el 23 de abril de 2012 en consecuencia, CONDENAR a LIBERTY SEGUROS S.A. a pagar a MARY DANIELA RESTREPO LATORRE y LAURA SOFIA RESTREPO LATORRE.

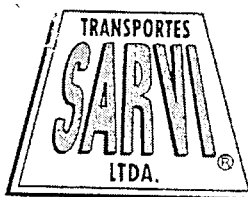
RADICADO 8867933300020140010200
ACCIÓN REPARACIÓN DIRECTA
DEMANDANTE HENRY RESTREPO CUELLAR Y OTROS
DEMANDADO ECOPEIROL S.A. Y OTROS
LLAMADA G LIBERTY SEGUROS S.A.

en las proporciones reconocidas y hasta el límite del valor asegurado, considerando el valor determinado en la póliza de seguros aludida y teniendo en cuenta el deducible pactado, de modo que TRANSPORTES JOALCO S.A. pagará la diferencia a que haya lugar entre lo efectivamente cancelado por el llamado y la condena impuesta, de conformidad a lo previsto en los artículos 1077 y 1080 del Código de Comercio. Para lo anterior, se ORDENA a la aseguradora que una vez realice el pago a las demandantes, deberá acreditarlo ante las entidades demandadas para que estas a su vez asuman las obligaciones a su cargo.

- Sexto. RECHAZAR la tacha de testimonios de los señores Elsa Mosquera y Rafael Latorre Bayona, según lo expuesto en precedencia.
- Séptimo. CONDENAR en costas al demandado TRANSPORTES JOALCO S.A., en los términos referidos en la parte motiva. Se liquidarán de conformidad con el artículo 366 del C.G. del P.
- Octavo. DENEGAR las demás pretensiones de la demanda.
- Noveno. Se ORDENA a la demandada a dar cumplimiento a la presente providencia de conformidad con lo previsto en el artículo 189 y s.s del CPACA.
- Décimo. Una vez en firme esta providencia, por Secretaría EXPIDASE copia auténtica de la sentencia con la respectiva constancia de notificación, ejecutoria y de ser primera copia que presta mérito ejecutivo, y ARCHÍVESE el expediente, previas las constancias en el Sistema Justicia XXI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


HUGO ANDRES FRANCO FLOREZ
Juez



TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

APROBACION RESOLUCION 221 - 19 DE JUNIO 1991
HABILITACION RESOLUCION 000436 - 25 DE JULIO 2000
NIT. 800.128.245-0

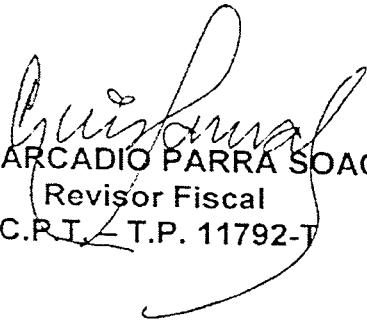
EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE TRANSPORTES SARVI LTDA

CERTIFICA

Que el vehículo de placas SUB-011 no ha realizado ningún despacho por la empresa **TRANSPORTES SARVI LTDA**, con Nit 800.128.245-0 en el periodo comprendido entre el 1 de enero del 2010 al 29 de junio de 2013, de acuerdo con la información y registros del sistema de la compañía.

Se expide la presente certificación a los dos (2) días del mes de julio del año 2013 en la ciudad de Bogotá D.C.

Atentamente,


LUIS ARCADIO PARRA SOACHA
Revisor Fiscal
C.P.T. - T.P. 11792-T

TRANSPORTES SARVI LTDA.
800.128.245-0



BAC